



Honduras: Contexto geopolítico y gobernanza territorial

Los casos del litoral atlántico y la Muskitia

Centroamérica, febrero de 2025

**Coordinación**

Nelson Cuéllar y Susan Kandel

Redacción

Andrés Palma y Madelyn Rivera

Elaboración de mapas:

Oscar Díaz

Diseño

Diana Díaz

Diagramación y Revisión editorial

Leonor González

Contenido

Introducción	4
Contexto histórico de la geopolítica en Honduras	6
El golpe de Estado de 2009 y la geopolítica de Honduras en el presente siglo	13
Los casos del litoral atlántico y la Muskitia	16
El litoral atlántico y el pueblo garífuna: su proceso de construcción y defensa territorial	17
Enclaves, reformas agrarias y políticas neoliberales: Ciclos de despojo del pueblo garífuna	19
Principales Dinámicas Territoriales	21
La Muskitia hondureña	24
Reformas agrarias y el avance de la frontera agrícola: Ciclos de invasión en la Muskitia	25
Principales dinámicas territoriales	27
Rasgos del contexto geopolítico actual:	
Estados Unidos, México, China y Honduras	31
Implicaciones para la gobernanza territorial.....	35
Referencias	37

Introducción

Honduras y su región nororiental, históricamente han estado bajo un renovado interés geopolítico. Esto se debe a su ubicación geográfica privilegiada entre el océano Atlántico y el Pacífico y a las condiciones topográficas, que le han dotado de una gran variedad de recursos hídricos, forestales, minerales y energéticos como el petróleo, que motivaron la ocupación europea durante el siglo XVI y, en el presente, como un sitio de disputa para el dominio territorial y la explotación comercial de los recursos naturales.

El proyecto de estado-nación tuvo un acercamiento particular con la zona del litoral atlántico, ya que, al ser una periferia del territorio nacional, tuvo una escasa presencia y, por tanto, ha sido una zona disputada entre intereses de diverso origen, especialmente el del capital extractivista, que ha condicionado la forma en que se organiza política y económicamente Honduras. La influencia estadounidense, desde inicios del siglo XX, vinculó al país, con el mercado internacional mediante la minería y las exportaciones de banano. Más tarde, en la década de los ochenta, marcada con la cooperación para la seguridad, que se ha manifestado a través del tiempo en un proceso de militarización. Por ejemplo, a pesar de no tener un conflicto armado interno como El Salvador y Guatemala, desde 1980 al presente, Estados Unidos ha brindado al país cerca de US\$296 millones¹ únicamente en Asistencia Militar Comprometida. Siendo Honduras el segundo mayor receptor de este tipo de cooperación en el Triángulo Norte, solo detrás de El Salvador.

Lo anterior ha marcado la política hondureña, que ha visto como las Fuerzas Armadas son un actor político central desde entonces, a tal punto de llevar a cabo un golpe de estado en 2009. A partir de ese momento, sucedió un reacomodo en las élites políticas hondureñas, que ha significado en la zona del litoral atlántico, una profundización del modelo económico extractivista que ha caracterizado el desarrollo particular de esta zona. Dos ejemplos para entender esta situación son el caso de los pueblos garífunas y miskitu en la región nororiental del país.

A pesar de encontrarse en un territorio biodiverso y donde se generan servicios ecosistémicos claves para la resiliencia nacional y regional, estos pueblos se encuentran en la primera línea del asedio, la conflictividad socioambiental y de alta vulnerabilidad al cambio climático. Como

¹ Esta cifra es con base en los datos de U.S. Foreign Assistance.

resultado de un entramado de intereses, que interviene sus territorios ancestrales para el desarrollo de dinámicas económicas extractivistas (palma africana, minería, y explotación de petróleo) y la instalación de megaproyectos de infraestructura (turísticas, energéticas y logísticas), impulsadas por una serie de reformas políticas, muchas veces apoyadas por la cooperación e instituciones financieras internacionales.

Los pueblos garífuna y miskitu, durante décadas, han emprendido diversas estrategias de resistencia y de defensa territorial, basadas en saberes ancestrales frente al despojo sistemático, cada vez más crítico por la presencia del crimen organizado. La forma en que el actual Estado gestiona esta realidad es importante, en tanto es el primer gobierno después del golpe de 2009, diferente a la trayectoria del Partido Nacional y también presidido por primera vez por una mujer, vinculada en el pasado con movimientos sociales en Honduras. Sin embargo, el gobierno hondureño sigue ejerciendo un papel estratégico para el avance de dichas dinámicas territoriales, pero también para los intereses geopolíticos (principalmente de Estados Unidos y China) que se disputan la influencia sobre la región centroamericana y sus recursos.

Contexto histórico de la geopolítica en Honduras

Honduras, como parte de Centroamérica, ha compartido una historia similar con el resto de las naciones de la región (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), con una variada población nativa que fue sometida por el Imperio Español en su conquista del continente americano en el siglo XVI (Herlihy, Fahrenbruch y Tappan, 2022). Es precisamente una característica que dota de sentido a la región la que marcó un destino compartido centroamericano: la de “estar en el centro” de América. La región se compone de una franja territorial que es, de una parte, puente —conectando a América del Norte con América del Sur— y, por otra parte, istmo —como un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico— (Pérez Brignoli, 2017). Esas dos condiciones fueron advertidas desde temprano por naciones poderosas en el mundo, por lo que la influencia de los intereses geopolíticos ha tenido un peso considerable en el devenir histórico regional (Granados, 1985).

Más allá de esta condición compartida y de alcance al presente, no se debe tomar por menos las trayectorias históricas individuales que han tenido las naciones centroamericanas. En el caso de Honduras, la forma en que se han vinculado los intereses geopolíticos con su propio desarrollo nacional es compleja, pero se puede describir en al menos dos sentidos. Uno de ellos es en relación con las presiones geopolíticas externas y su influencia a nivel local. El otro es en relación con el actuar de las élites y los tomadores de decisión hondureños a través de la historia, y que ha marcado la política de Estado.

Con respecto a las influencias externas, el legado español desde el siglo XVI tuvo el mayor peso con respecto a su desarrollo nacional. Pero no se debe dar por menos las influencias que tuvieron en Honduras las potencias colonas europeas e incluso la actual Colombia (Ghotme, 2012b); pero en mayor medida, el Imperio Británico. Como parte de las disputas por los recursos del continente americano, y específicamente el control del Caribe, Gran Bretaña tuvo un peso significativo en el litoral centroamericano.

Los actuales Belice, Nicaragua y Honduras fueron particularmente valiosos para la expansión comercial británica en los siglos XVII y XVIII, y en el caso de Honduras, tuvo relevancia mayor la zona de la Muskitia, que partía desde el Cabo de Honduras hasta el río San Juan en Nicaragua

(Ghotme, 2012a). Gran Bretaña ejerció su influencia principalmente a través de relaciones comerciales con miskitus locales, quienes suministraban materias primas como maderas y carne a las islas del Caribe bajo control británico, y a la propia Inglaterra (Krizova, 2014). En esta zona, se halla históricamente el pueblo Miskitu, pero también los Pech, Tawahka, los Rama y los Mayangna (Herlihy, Fahrenbruch y Tappan, 2022). Los primeros se encuentran al presente en considerable cuantía en Honduras, tanto en la costa este hondureña como en la capital (Herlihy, Fahrenbruch y Tappan, 2022).

Si bien esta zona era importante para Gran Bretaña, el contexto de independencia de las 13 Colonias estadounidenses, sumado a las constantes disputas en el continente americano con Francia, España y Holanda, hacen que para finales del siglo XVIII Gran Bretaña se aleje de la Muskitia (Ghotme, 2012a), algo que finalmente se pactaría en el Tratado Wykes-Cruz en 1859, un acuerdo que por parte de Honduras prometía a los miskitus el reconocimiento de posesión de dichas tierras (Galeana, 2021). No obstante, es importante señalar dos asuntos con relación a esta partida. El primero es que, a pesar del abandono formal de Gran Bretaña en Honduras, no se cortaron necesariamente los lazos comerciales y culturales con los británicos colonos en la zona. El segundo asunto, y vinculado a lo primero, es que los miskitu mantuvieron cierta independencia del dominio español y el posterior orden imperante en la zona; ya que mostraron incluso un distanciamiento todavía después en el desarrollo de la República de Honduras y Nicaragua (Díaz Arias, 2021; Ghotme, 2012a).

Esto marcará una relación particular entre Tegucigalpa y La Muskitia con implicaciones al presente: Desde el desarrollo temprano de la república hondureña, las intenciones de ‘civilizar’, educar, pero principalmente disciplinar a las poblaciones indígenas del noreste, son explícitas desde el Estado, hasta ya incluso asomándose el siglo XX (Díaz Arias, 2021). Así, el caribe hondureño ha sido un lugar de explotación de recursos, de intersección de intereses geopolíticos imperiales y de una vasta complejidad étnica debido a las dinámicas comerciales y sociales derivadas. Al mismo tiempo, la zona se planteó desde la génesis del estado-nación hondureño, como un lugar por conquistar, al cual los esfuerzos deberían procurar integrar al proyecto ideológico nacional que fue tomando forma durante los siglos XIX y XX.

Con respecto al actuar de las autoridades hondureñas ante la geopolítica, el desarrollo económico estuvo ligado a un modelo agroexportador característico de Centroamérica, principalmente a través del café, que unió nuevamente los hilos del destino centroamericano a finales del siglo XIX e inicios del XX. Sin embargo, el café en Honduras no tuvo tanto éxito como en sus pares regionales debido a las condiciones de sus suelos, y sólo fue realmente viable hasta la segunda mitad del siglo XX (Pérez Brignoli, 2017). Fue el banano el producto que vinculó a Honduras con el mundo; tal fue esto que ya en la tercera década del siglo XX, Honduras fue el mayor exportador de banano globalmente (Pérez Brignoli, 2017).

Este producto será de gran valor para la historia nacional; y en términos del poder político, se tradujo en que quien controlase el comercio de banano poseería un peso significativo en el rumbo de Honduras. Así, los intereses de las compañías bananeras en Honduras fueron

Recuadro 1: Las élites hondureñas

Las élites hondureñas tienen una historia particular si se comparan con otras de la región. Las principales industrias de exportación en Honduras, la minera y la bananera, eran casi totalmente de propiedad extranjera. El más famoso de estos monopolios fue United Fruit Company, que consolidó su hegemonía sobre la política local en los años treinta y cuarenta del siglo pasado, durante la dictadura militar. Mientras tanto, la élite económica local estaba ampliamente basada en el sector agrícola y en otros proyectos, y pasó a conformar la columna vertebral de las agrupaciones políticas tradicionales del país: los partidos Nacional y Liberal. Sin embargo, en Honduras no se materializó una élite local fuerte basada en la tierra y la agroexportación, como la que se encuentra en otros países de la región. Esto debido a que la élite más tradicional y de menor tamaño competía por el poder, primero con las empresas extranjeras y más tarde con los inmigrantes extranjeros que concentraron sus esfuerzos en controlar el flujo de capital extranjero y facilitar los trámites de las empresas foráneas. Estas comunidades de inmigrantes llegaron de Europa y el Medio Oriente durante el siglo XX. Desde entonces, han sido conocidas como las élites “transnacionales”.

Estas élites establecieron un control sobre las industrias dominantes de Honduras: los sectores financieros y de servicios y las telecomunicaciones. También adquirieron tierras, superando su control sobre la economía agraria a medida que la élite local se desplazaba hacia las exportaciones no tradicionales. Hoy en día, puede ser difícil diferenciar entre la élite tradicional y la transnacional. Aunque esta fusión es más comúnmente asociada a las élites transnacionales que a las tradicionales, ambas han diversificado sus portafolios económicos, y ambas están profundamente involucradas en la política.

Fuente: Elaboración propia a partir de InSight Crime (2016).

tomando relevancia nacional con el avance del siglo XX, involucrándose incluso dichos intereses en guerras civiles, mediadas por los Estados Unidos, como auténticas *banana wars* (Pérez Brignoli, 2017).

El Estado hondureño, entonces, se vio inmerso en conflictos por conservar un orden social que mantuviera satisfechos a los intereses agroexportadores, principalmente del banano de capital extranjero; y por mediar los clamores populares por el mejoramiento de las condiciones sociales y laborales en las plantaciones y el país. La respuesta desde el Estado a ello estuvo marcada por el autoritarismo, notablemente desde el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Carías se mantuvo en el poder por la fuerza desde 1933 hasta 1949 con el auspicio de los Estados Unidos, la United Fruit Company (UFCO), y otro actor clave en la historia hondureña: Las Fuerzas Armadas de Honduras (Rojas Bolaños, 1993; Taylor-Robinson, 2014).

El ejército participó en mantener en el poder a Carías, y tras los cambios inevitables con la caída de este, también consiguió garantías favorables tras acuerdos con las nuevas autoridades en la Asamblea Constituyente de 1957 (García Buchard, 2021; Rojas Bolaños, 1993). En las elecciones posteriores, el ejército ha sido clave para controlar el proceso en el cual se rotaban el poder el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), con usuales posicionamientos tradicionalmente más hacia la derecha y la izquierda, respectivamente. Este lugar destacado favoreció a que el ejército hondureño participara en el golpe de Estado a Ramón Villeda Morales, del PL, en 1963. Villeda Morales, fue visto como una amenaza a los sectores históricamente

poderosos de Honduras, por su reformismo y la “influencia comunista” que representaba acorde al momento internacional de Guerra Fría (Rojas Bolaños, 1993).

A partir de este momento, el ejército tomó un rol más activo en la política de Honduras, y formalmente cedió el poder a un gobierno civil hasta 1981 (Rojas Bolaños, 1993; Taylor-Robinson, 2014). Es en este período cuando se hace todavía más explícita la influencia geopolítica estadounidense en Honduras. Por ejemplo, la transición de un gobierno militar hacia un gobierno civil a finales de los años setenta fue influida por el recorte de fondos de cooperación estadounidense a países con gobiernos militares como el de Honduras (Smith, 2005; Taylor-Robinson, 2014). Asimismo, dada la victoria de los Sandinistas en Nicaragua para 1979 y el contexto de Guerra Fría en el que Centroamérica se vio envuelta, con los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989) la ayuda y presencia militar estadounidense —formal e informal— en Honduras creció considerablemente (Meyer, 2023; Taylor-Robinson, 2014).

Con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, a inicios de la década de los noventa, la influencia geopolítica de los Estados Unidos en Centroamérica continuó sin mayores disputas. Al mismo tiempo, Centroamérica se empezaba a reconstruir tras los conflictos armados internos, principalmente en el Triángulo Norte —Honduras, Guatemala y El Salvador— (Figueroa, 1994). Las secuelas de dichos conflictos, sumados a una crisis económica debido al crecimiento de la deuda exterior de los países de la región en la década anterior, la caída de precios en los mercados mundiales y un agotamiento del modelo agroexportador, entre otros factores (Pérez Brignoli, 2017; Segovia, 2004), crearon un escenario de incertidumbre regional e internacional. Aunado a este desconcierto, las salidas recomendadas a la crisis fueron parecidas en todos los países centroamericanos: más tarde o temprano, en todos los casos implicaron una aceptación de los preceptos del *Consenso de Washington*, que aconsejaban un considerable reajuste político y económico de los países, bajo un esquema de liberalización moderno o neoliberal (Morgenfeld, 2023).

Esto llevó a que, con el auspicio de organismos financieros multilaterales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— y la tutela de los Estados Unidos, los países debieran realizar una serie de reformas para hacer un “ajuste estructural” que permitiría salir del mal momento. Dichas reformas involucraron el abandono del modelo de industrialización por sustitución de importaciones hasta entonces utilizado, devaluación de la moneda nacional, apertura económica y eliminación de barreras comerciales, introducción de productos no tradicionales para exportación, privatización de empresas estatales, entre otras medidas (Pérez Brignoli, 2017). Aunque esto no fue un proceso necesariamente directo ni tampoco ortodoxo en todos los países de la región; esta serie de reformas tuvo efecto, hasta el presente, en cómo se entiende a Honduras hoy día política y económicamente.

Existió una clara influencia estadounidense en el proceso de reforma estatal, y reconversión productiva (Boersner, 2004), pero también en el reforzamiento militar y continuación de una cultura política autoritaria en Honduras a finales del siglo XX (García Buchard, 2021). Lo

anterior apunta al rol que sigue jugando el ejército en la política hondureña, tanto a nivel interno como aliado regional de los Estados Unidos. En ese sentido, la aceleración de un proceso de globalización económica (Robinson, 2001) bajo el Consenso de Washington hizo que los intereses estadounidenses en Centroamérica se modificaran, al igual que la importancia de Honduras en los mismos.

Recuadro 2: El Proyecto del Bajo Aguán

El Bajo Aguán, ubicado en la parte baja de la cuenca del río del mismo nombre, en el norte de Honduras. Este territorio, como mucho del noreste, no destacó particularmente en las prioridades del proyecto nacional, como se indicó previamente. En las décadas de 1920 y 1930, parte de estas tierras, que se extienden aproximadamente por más de 200,000 hectáreas, fueron concesionadas a la Truxillo Railroad Company, subsidiaria de UFCO, para plantaciones de banano.

En la década siguiente, el espacio fue abandonado debido al “mal de Panamá”, un hongo que afectó las plantaciones, por lo que se trasladó la producción y dejó a comunidades garífunas y trabajadores

bananeros y del ferrocarril (construido por la Truxillo para esta producción), con estas tierras en abandono. Teniendo la huelga bananera de 1954 presente, y la Revolución Cubana de 1959, el gobierno hondureño, en consideración por los conflictos agrarios que presentaba en el país, acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para la formulación de una reforma agraria en 1960. Esto concluyó en la conformación de la Misión 105, que planteaba dos proyectos de colonización en Honduras, uno en el bajo Aguán y otro al sur del país. En el caso de Aguán, debido a limitaciones de información y recursos, se limitó a la parte baja. La idea era concretar un proyecto que, por un lado, ayudara a aliviar la tensión por la falta de tierras reclamada por campesinos y, por otro lado, crear iniciativas productivas que permitieran a esas familias insertarse en el mercado y pagar eventualmente al gobierno las deudas adquiridas en el marco de este proyecto. Finalmente, el Proyecto Bajo Aguán terminó siendo atrasado —por diversas razones— hasta 1971.

El proyecto tomó más fuerza todavía después del golpe de Estado de 1972 y el proceso de modernización estatal por parte de ese gobierno militar. En 1974, tras el paso del huracán Fifi, las cooperativas formadas en el lugar que ya tenían experiencia en la producción de granos básicos como maíz y frijol se vieron empujadas a introducir la palma africana en las cooperativas por el Instituto Nacional Agrario (INA). Este fue un monocultivo resistido en un inicio, pero al que accedieron ante la promesa de ganancias, mientras su situación se agravaba por las deudas contraídas y las pérdidas por el paso del siniestro. Es casi a la fuerza, entonces, que la palma africana llegó al Bajo Aguán y desde entonces ha pasado por un proceso de desarrollo y ampliación en forma de monocultivo, aunque cada vez en las manos de menos cooperativas de las que había inicialmente en el proyecto. Incluso, por las complicaciones de producción y las disputas por intereses empresariales en la zona, muchas cooperativas terminaron en ruinas y vendiendo sus tierras, lo que devolvió a muchos campesinos a su condición anterior al arribar al Bajo Aguán. Asimismo, la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de 1992, junto con medidas propias del ajuste estructural de los años ochenta y noventa, representaron una contrarreforma agraria que ha permitido la concentración de tierras en el lugar y el surgimiento de nuevos conflictos agrarios. Incluso esto se ha profundizado a través de la articulación de intereses de actores internacionales y nacionales; tanto públicos como privados.



Fuente: Elaboración propia a partir de León Araya (2017; 2019)

Esta prisa comercial no solo impactó a las economías formales del hemisferio, sino también a las informales: hubo un crecimiento en el consumo de drogas, principalmente en los Estados Unidos, desde al menos la segunda mitad del siglo XX. Consecuentemente, las cadenas de suministro para el tráfico internacional de narcóticos se expandieron al margen de la legalidad y se volvió una preocupación para la seguridad nacional en los Estados Unidos, con mayor ahínco entrados los años 1980 (Smith, 2005). Así, como en varios países de la región latinoamericana, en Honduras, por el contexto de crisis, se vio una oportunidad de negocio en el narcotráfico (Elementa DDHH, 2024); por lo que, además de la demanda, desde los Estados Unidos crecieron también los esfuerzos por combatir el narcotráfico a través del entrenamiento, equipamiento y financiamiento de las fuerzas del orden en los países de Latinoamérica (Smith, 2005).

Sin embargo, esta situación se manifestó finalmente en una mayor militarización² en la región y un aumento en la violencia en los países en que las diferentes estrategias de los Estados Unidos y los países latinoamericanos por combatir esta actividad se desplegaron (Sandoval García, 2015; Morgenfeld, 2023; Gobat, 2022). En Honduras, esto ha implicado un empeoramiento en las condiciones de vida de aquellos que quedan atrapados entre la violencia de quienes disputan la producción, distribución y transporte de narcóticos, y el combate activo de las fuerzas de seguridad a estas actividades. Esto es un factor que ayuda a explicar la creciente emigración hondureña y centroamericana hacia otros países, pero principalmente a los Estados Unidos desde al menos hace 40 años (Sandoval García, 2015; Meyer, 2023; The White House, 2021; Elementa DDHH, 2024).

Teniendo como punto de partida el período de los años ochenta, se han ampliado estrategias de reforzamiento para la seguridad regional debido al narcotráfico. Desde los gobiernos estadounidenses de Ronald Reagan en adelante, se ha argumentado la existencia de una serie de factores relacionados que vulneran la seguridad nacional y la importancia de su endurecimiento. A partir de ese momento, la migración hacia Estados Unidos desde México y Centroamérica es un asunto de Estado. Asimismo, la migración se ha vinculado en la legislación y en el abordaje práctico de las fuerzas de seguridad, con la economía del narcotráfico, la trata de personas y actividades como el terrorismo; todas con el común denominador de poner en riesgo la seguridad nacional (Sandoval Palacios, 2022; Sandoval García, 2015).

Los gobiernos estadounidenses, en coordinación con los gobiernos de México y los del Triángulo Norte de Centroamérica, se han planteado un grupo de iniciativas que buscan abordar el tema de la seguridad fronteriza y la migración hacia los Estados Unidos durante este siglo. Ejemplo de ello son la Iniciativa Mérida entre Estados Unidos y México, la Iniciativa Regional de

² Sobre el concepto, en secciones siguientes se retoma la discusión sobre sus implicaciones. En este texto se entenderá por militarización como el uso o despliegue de las fuerzas de seguridad civiles y militares para vigilar, controlar, detener, e interceptar potenciales amenazas al orden político establecido. Se caracteriza por el protagonismo del Estado para garantizar el desarrollo de dinámicas extractivistas propias del modelo económico vigente (Alonso, 2023).

Seguridad para Centroamérica (CARSI), el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y la más reciente “Estrategia de los Estados Unidos para afrontar las causas originarias de la migración en América Central” (Ribando, Finklea y Congressional Research Service, 2017; Meyer, Ribando y Congressional Research Service, 2015; Villafuerte Solís, 2018; The White House, 2021). Honduras juega un papel destacado en las tres últimas iniciativas, ya que, en el contexto de militarización, marcado por un aumento de la violencia y desigualdades territoriales, el país es un foco de atención de estas. Estas iniciativas también coincidieron con el momento de avance de las reformas neoliberales y la promoción de inversiones extranjeras.

A modo de ejemplo, es revelador que una tragedia como el paso del huracán Mitch en 1998 dejó secuelas que sólo pueden entenderse como parte del periodo de ajuste estructural. La destrucción material (infraestructural, de vidas humanas y de pérdida de la producción nacional) que causó el huracán solo puede ser equiparada con las vulnerabilidades institucionales y democráticas de Honduras que dejó divisar el siniestro. Por ejemplo, a nivel interno, expuso los altos niveles de corrupción de las élites hondureñas al utilizar el clientelismo para el otorgamiento de ayudas y la venta de activos del Estado (Taylor-Robinson, 2014; Guzmán y León, 2019), y una concentración del poder político y económico en pocas manos, en poco tiempo (García Buchard, 2021).

Otra muestra evidente de lo anterior fue la promoción de políticas para la atracción de inversiones en el sector turístico, y una reforma constitucional que permitiría la compra de tierras por parte de extranjeros para esta finalidad, apenas días después del paso de Mitch.³ Asimismo, en el mismo 1998, se aprobó una Ley General de Minas, que brindó incentivos para el desarrollo de la minería en Honduras, lo que ha dado paso a conflictos por la instalación de esos proyectos en comunidades rurales e indígenas de Honduras. Esta actividad ha sido particularmente perjudicial para las comunidades garífunas del atlántico hondureño, en donde se formó un ciclo de conflictos por la tierra, violencia y dinámicas de despojo (Guzmán y León, 2019; PRISMA, 2022).

En cuanto al nivel externo, el desastre de Mitch en el contexto de reforma neoliberal significó que, además de Honduras, depender en gran medida de la cooperación internacional, para las familias que no llegaron las ayudas o que las condiciones marginaron lo suficiente para tener mayores incentivos en migrar fuera del país; pasarían ahora a ser un componente clave de la economía hondureña. Las remesas enviadas desde el extranjero ayudarán a explicar las relaciones socioeconómicas en el país desde entonces (Segovia, 2004; PRISMA, 2024). Tal es esto, que los aportes en remesas han significado hasta un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) reciente de Honduras (Euraque, 2022).

³ Hasta entonces, la Constitución hondureña prohibía la propiedad extranjera en tierras costeras a través del artículo 107. Sin embargo, legisladores de la época reformaron el artículo, creando las condiciones para la recepción de la inversión extranjera, pues el turismo apuntaba a convertirse en la prioridad de desarrollo estatal (Loperena, 2023; OFRANEH, 2007).

■ El golpe de Estado de 2009 y la geopolítica de Honduras en el presente siglo

En esta coyuntura de instituciones frágiles, continuación del proyecto neoliberal y una democracia poco sustantiva a inicios del presente siglo, el relativamente débil gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) fue notable en términos de lo que involucró su estadía en el poder en Honduras. Pero también lo es por las implicaciones geopolíticas involucradas en su deposición con un golpe de Estado en 2009. El gobierno de Zelaya, del PL, rápido se enfrentó con una crisis energética, ya que tenía una dependencia de la importación de hidrocarburos y el control de precios de las empresas extranjeras. Además, era un hecho la bancarrota de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras. Ante la resistencia del sector empresarial y de la propia Embajada estadounidense a la decisión del gobierno de romper contratos con las importadoras, esto acercó al gobierno hondureño a Petrocaribe, la iniciativa del gobierno de Venezuela, para obtener hidrocarburos en condiciones más favorables. Poco tiempo después, Zelaya hizo explícita la intención de unirse a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y tener acercamientos con el gobierno de Hugo Chávez (Guzmán y León, 2019).

El asunto energético en Honduras resulta un campo de disputa política debido a que es un sector clave para las élites locales, así como ha representado intereses geopolíticos por los recursos petroleros que posee el país,⁴ y en esa coyuntura fue más que evidente. A inicios de los años 2000, estudios de Japón, Estados Unidos y Rusia comenzaron a señalar fuertes posibilidades de yacimientos en el litoral atlántico y en La Mosquitia (FOSDEH et al., 2021). Para el 2008, en el gobierno de Zelaya, la empresa Noruega Petroleum Geo-Services (PGS) realizaba estudios de exploración,⁵ despertando el interés de empresas sobre el petróleo en Honduras: PDVSA (Petróleos de Venezuela), Chevron (Estados Unidos), Petrobras (Brasil) y Pemex (México)⁶ (Contra Corriente, 2022).

En adición a este cambio visto como radical para las élites de Honduras, el gobierno de Zelaya aumentó el salario mínimo en un 60% y estuvo más abierto a espacios de diálogo con sectores históricamente subalternos como sindicatos, grupos ambientalistas, campesinos e indígenas, etc. que los gobiernos predecesores (Guzmán y León, 2019). Esto significaba una ruptura amplia con las estructuras y la tradición de la democracia liberal hondureña hasta entonces. Además, las disputas recurrentes con el Congreso, dirigido por Roberto Micheletti, del propio PL y el descontento por parte de los sectores poderosos de Honduras por decisiones en política interna e internacional como las mencionadas anteriormente, llevaron a que Zelaya sufriera un

⁴ Los intereses por la exploración y extracción petrolera en el país se registran desde al menos 1920, cuando diferentes empresas y gobiernos de turno mostraron iniciativas para la búsqueda del recurso.

⁵ Tras el golpe de Estado, los resultados del estudio se entregaron hasta en 2010 (PRISMA, 2012).

⁶ Este acercamiento se concretaría 15 años después, tras el regreso de los Zelaya al gobierno de Honduras. En 2022, Andrés Manuel López Obrador habló de potenciar el desarrollo de los centros petroleros en Honduras mediante el apoyo de México para la explotación petrolera. Dicha propuesta se concretaría en marzo del 2023, cuando la Secretaría de Energía (SEN) y la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un convenio de cooperación.

golpe de Estado el 28 de junio de 2009 por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Sería el mismo Micheletti quien ostentaría el poder hasta 2010, año en el que el PN tomaría el poder con Porfirio Lobo a la cabeza (Guzmán y León, 2019; Taylor-Robinson, 2014).

Posterior al golpe de 2009, el PL resultó un perdedor más y consolidó el poder del PN. En cuanto al contexto geopolítico de Honduras, devolvió su mirada a los Estados Unidos en el gobierno de Lobo y en los siguientes dos períodos de Juan Orlando Hernández (con su segundo periodo siendo ampliamente cuestionado), de 2014 a 2022. Aun con suspicacias tras el golpe y el actuar de las administraciones del PN, la cooperación estadounidense se mantuvo para atender situaciones como apoyo económico, seguridad, control de la emigración hacia el norte del continente y combate al narcotráfico (Meyer, 2023).

Al mismo tiempo que esa cooperación continuaba, los gobiernos del PN dejaron clara la visión de país que querían de Honduras para las siguientes décadas: un país en que la inversión extranjera es bienvenida con beneficios. Así, la seguridad jurídica y patrimonial para los inversionistas es clave, y la intención de concretar una amplia cartera de megaproyectos en sitios como la Muskitia es evidente a pesar de resistencias locales. De tal modo que en 2011 se promulgó la Ley de Promoción de Inversión y la estrategia *Honduras is Open for Business*, que da cuenta de esta visión (PRISMA, 2012).

Paralelamente, este período posterior al golpe significó un retroceso en la protección de los derechos humanos, avance de la violencia homicida en el país y un aumento del narcotráfico en Honduras, siendo ahora un lugar estratégico para esta actividad en el continente, mientras que continúa infiltrándose en varias esferas de la economía y la política del país (Altamirano Rayo, 2021; Ernst y Adams, 2024; Elementa DDHH, 2024). Con respecto a la violación de derechos humanos, a modo de ejemplo, la organización Global Witness señala que Honduras es el tercer país más letal en el mundo para defensores medioambientales, ya que con datos del 2023 se han perpetuado 18 asesinatos; y entre 2012 y el año 2023, la cifra asciende a 149: con diferencia, posee el mayor número de homicidios en Centroamérica en ese periodo (Global Witness, 2024).

Anteriormente se ha señalado cómo la corrupción y el narcotráfico han sido preocupaciones de los Estados Unidos en Honduras, y todavía más después del golpe a Zelaya (Meyer, 2023). Sin embargo, esto no significó una ruptura de las relaciones ni la suspensión de cooperación a los gobiernos de Honduras posteriores al golpe. El aumento del narcotráfico que siguió al golpe de Estado llevó a Estados Unidos a canalizar importantes flujos de cooperación para equipar a las instituciones policiales y militares hondureñas. Entre el periodo del 2010-2023, Honduras ha recibido cerca de US\$195 millones de asistencia comprometida en seguridad,⁷ incluyendo los fondos regionales de la *Iniciativa Mérida* y *CARSI*. Estos han sido cuestionados, pues, más allá de combatir al narcotráfico, mejorar las condiciones de seguridad y por ende frenar la migración hacia Estados Unidos, estas iniciativas no generaron cambios frente a la serie de situaciones

⁷ Esta cifra es con base en datos de U.S. Foreign Assistance. Incluye montos de asistencia económica y militar.

que hicieron que generalizara un sentimiento de desesperanza ante el funcionamiento de un ‘narcoestado’ legitimado por los Estados Unidos, por lo cual migrar se muestra como una opción deseable para sectores de la población.⁸

En dicha coyuntura, sectores de la población buscaron devolver a Zelaya, y lo que representaba este, al poder. Así, la derrota que significó el golpe no mantuvo a Zelaya lejos de la política hondureña: en 2011 fundó el partido Libertad y Refundación (LIBRE) junto con el apoyo de sectores afectados por la situación del país post-golpe, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). LIBRE participó en las elecciones desde 2013, 2017 y 2021 con Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, como candidata. Tras una primera derrota de LIBRE en 2013 y una segunda en coalición, venció en su tercera candidatura al PN en 2021, asumiendo el poder en 2022 (BBC Mundo, 2021).

⁸ Un ejemplo de esta situación son las reiteradas migraciones grupales de centroamericanos hacia los Estados Unidos durante estos años. De mayor notoriedad fue el caso de la Caravana Migrante, que salió de San Pedro Sula en octubre de 2018, frente a las problemáticas sociales vividas durante los gobiernos de JOH en Honduras. Sin embargo, a la caravana se unieron migrantes de varias nacionalidades con el mismo fin de buscar una mejor vida en los Estados Unidos. El número exacto de migrantes en dicha caravana varía según diversas estimaciones, pero para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para ese mismo mes rondaban los 7,000 migrantes cruzando por México hacia los Estados Unidos (Correal y Specia, 2018).

Los casos del litoral atlántico y la Muskitia

La expresión de las dinámicas presentadas en el contexto anterior es posible observarla en la región nororiental de Honduras, que se extiende a lo largo de los departamentos de Atlántida hasta Gracias a Dios. En esta zona, coexisten diversos intereses geopolíticos, así como distintas estrategias de actores nacionales e internacionales, que buscan sistemáticamente la explotación comercial de sus recursos naturales. La implementación de políticas neoliberales y la “guerra contra las drogas” de las últimas décadas han convertido a esta región en un corredor estratégico para el despliegue de actividades ilícitas, entre las que destaca el narcotráfico, controlado por organizaciones criminales que, a través de proyectos de inversión extractiva, encubren el capital ilícito, implementando estrategias de control cada vez más agresivas.

Ante este contexto, desde el Estado se ha desplegado una estrategia militarizada caracterizada por la violencia, represión y criminalización de la resistencia de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, quienes se encuentran en la primera línea del asedio, la conflictividad ambiental y de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. A continuación, se presenta el caso del Litoral Atlántico y la Muskitia en el proceso de construcción y defensa territorial del pueblo garífuna y miskitu.

La región nororiental de Honduras se constituye de dos territorios claves: el Litoral Atlántico y la Muskitia. Debido a su ubicación geográfica y a la riqueza de recursos naturales, estos territorios históricamente han estado bajo la disputa geopolítica, desde su relevancia como sitios de defensa durante la época colonial hasta el presente como áreas de mayor interés comercial, pues albergan una gran variedad de recursos hídricos, forestales y energéticos como el petróleo. Los pueblos garífunas y miskitus enfrentan “en primera línea” estos cambios, particularmente con el auge de la agroexportación y los proyectos extractivos impulsados por las reformas agrarias y políticas neoliberales, provocando la colonización y acaparamiento de sus territorios ancestrales.

■ El litoral atlántico y el pueblo garífuna: su proceso de construcción y defensa territorial

De acuerdo con la tradición oral del pueblo garífuna, su origen se remonta a la época colonial cuando los caribes isleños se mezclaron con los cimarrones africanos,⁹ que llegaron a las costas de la isla de San Vicente (en garífuna, Yurumein),¹⁰ en la época precolombina como comerciantes de oro y exploradores (Gargallo, 2002; Castillo, 2021). Cuando San Vicente pasó a formar parte del Imperio Británico,¹¹ los ingleses exiliaron a los garífunas hacia la Isla de Roatán, cercana a las costas de Honduras, en el año de 1797,¹² *como represalia a la resistencia que estos habían mostrado durante los diferentes intentos de colonización* (Castillo, 2021). A su llegada a Roatán, los garífunas fundaron la primera comunidad, ahora conocida como Punta Gorda (Ídem); de ahí posteriormente emigraron a tierra firme asentándose en la bahía de Trujillo y a lo largo de la costa caribe de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua (Loperena, 2023; Iborra, 2019). Honduras no solo es la primera ubicación en Centroamérica donde llegaron los garífunas, sino que también es el país con mayor número de comunidades (47) dispersas a lo largo del litoral atlántico (ver Mapa 1).

El proceso inicial de dispersión y asentamiento de los garífunas en la bahía de Trujillo¹³ (un mes después de su llegada a Roatán) se da en medio de disputa geopolítica entre España e Inglaterra. La bahía de Trujillo había adquirido gran importancia como frontera, puerto y defensa de la Corona española, por lo que el vínculo con los garífunas resultó favorable, señala Gargallo (2002), ya que requerían su permanencia en el puerto y su participación en las actividades agrícolas, de construcción y de defensa. No obstante, la armonía no era absoluta como consecuencia de particularidades identitarias¹⁴ (Payne, 2005; Agudelo, 2013). Las

⁹ Castillo (2021) señala a los “caribes isleños” y los “caribes negros” como ancestros directos del pueblo garífuna. Los primeros surgieron cuando los caribes se mudaron a las Antillas Menores desde la ribera amazónica para comerciar y luego ‘conquistar’ a los arawak, que ya vivían en las islas. En el período colonial, los caribes isleños se mezclaron con los cimarrones africanos, dando lugar a los garífunas o caribes negros, como les denominaron los ingleses. Por ello, los garífunas reivindican una negritud indígena, que escaparon, enfrentaron a los esclavizadores y nunca fueron esclavizados.

¹⁰ Yurumein es el nombre indígena, en lengua arauaca, de la isla de San Vicente. La memoria colectiva de los garífunas de Centroamérica recuerda la isla como una tierra donde vivieron en la abundancia y la libertad (Gargallo, 2002).

¹¹ En 1761, cuando ya se había iniciado la Guerra de los Siete Años (1756-1763), España y Francia se vieron obligadas a firmar la Paz de París (1763), la cual no solo puso fin a la guerra, sino que se recompuso de nuevo la geografía imperial: Francia cedió a Gran Bretaña los territorios de Granada, San Vicente, Dominica, Tobago y Senegambia (Gargallo, 2002).

¹² Roatán se convirtió en un sitio más estratégico para los ingleses que para los españoles, ya que la consideraban la entrada al seno mexicano y un punto esencial de abastecimiento y de comercio clandestino, valor que le dieron hasta 1860, en que fue recuperada por el Estado de Honduras (Payne, 2005).

¹³ Tras la independencia de Centroamérica en 1821, la bahía de Trujillo se vio inmersa en una nueva visión comercial y geopolítica al constituir uno de los puntos claves de defensa al interior de Honduras y de conexión con el resto del istmo, con las islas del Caribe, Estados Unidos, Inglaterra y España (Payne, 2005).

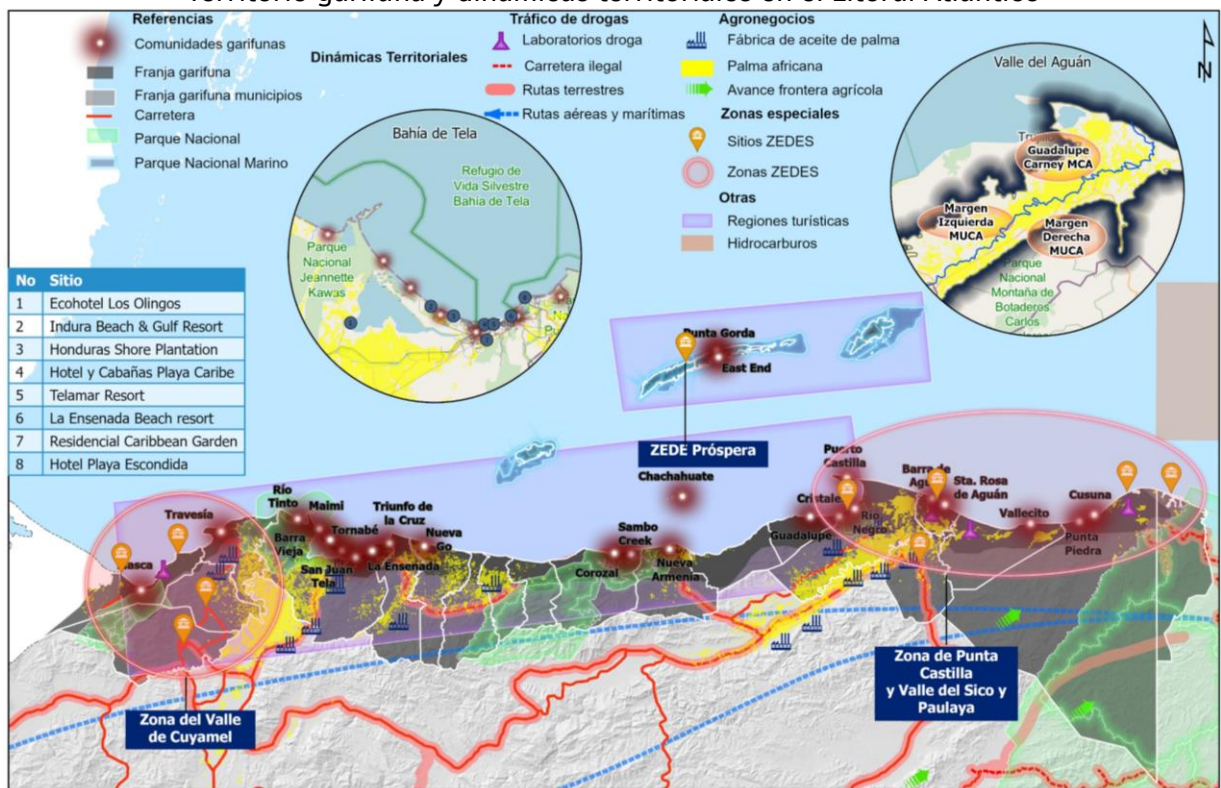
¹⁴ “El pueblo garífuna se ha mantenido aislado y autónomo, prefiriendo gobernarse a sí mismo”. De esta manera pudieron resistir la colonización, preservar su idioma, tradiciones y costumbres (Castillo, 2021).

autoridades coloniales intentaron su expulsión, pero la política definitiva que adoptaron fue su dispersión desde Trujillo hasta Plaplaya, en la Muskitia, convirtiéndose posteriormente en la primera región autónoma Garífuna de Honduras¹⁵ (Castillo, 2021).

En 1885, casi un siglo después de su llegada a Honduras, las comunidades garífunas establecidas en Trujillo recibieron del Estado el primer título de propiedad para el dominio pleno de sus tierras, mientras que el resto de las comunidades fueron tituladas de manera progresiva¹⁶ (Iborra, 2021). Sobre estas tierras, el pueblo garífuna ha practicado un sistema

Mapa 1

Territorio garífuna y dinámicas territoriales en el Litoral Atlántico



Fuente: Elaboración propia según; SINIT, Inside Climate. News (2024), EJAAtlas (2022a), Latina Republic (2021), Roux (2017), Mapa data OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. And its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

¹⁵ Esta región surge en 1832 tras el nombramiento del comandante Juan Francisco Bulnes (en garífuna Walumugu) como Cacique de la “Costa Arriba” Este cargo fue una retribución después de defender la Confirmación Centroamérica junto con el General Francisco Morazán. Tras la muerte de Walumugu en 1870, la región siguió en mano del pueblo garífuna por más de un siglo, hasta que en los años ochenta, fue invadida por las fuerzas militares y empresarios del país.

¹⁶ Las primeras comunidades en recibir el título fueron: Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. En 1889, Puerto de Castilla a favor de las comunidades de Cristales y Río Negro, en 1915 la comunidad de Irióna Puerto y Travesía, en 1921 Limón y Santa Rosa de Aguan, para 1922 Punta piedras y Cusuna, en 1936 Sangrelaya, Tocamacho y los ejidos de Bacalar, y en 1950 se logró el de Triunfo de la Cruz.

de producción agrícola migratorio conocido como barbecho. Esta práctica implica dejar las tierras en descanso (de cinco a quince años) después de un período relativamente corto de cultivo para garantizar la fertilidad y el uso sostenible de la tierra. Sin embargo, diferentes actores, incluyendo al Estado hondureño, vieron estas tierras como “ociosas” o “vacías”, disponibles para la inversión extranjera (Mollet, 2014; Loperena, 2023).

Enclaves, reformas agrarias y políticas neoliberales: Ciclos de despojo del pueblo garífuna

Durante el boom del enclave bananero (1900-1930), parte de los territorios garífunas comenzaron a perderse; tanto la Standard Fruit Company como Cuyamel Fruit Company y la UFCO recibieron del Estado grandes extensiones de las mejores tierras, a cambio de cada kilómetro que construyeran de ferrocarril¹⁷ (Iborra, 2020). Se estima que, para mediados de la década de 1920, las dos subsidiarias de la UFCO, Truxillo Railroad Company en el departamento de Colón y Tela Railroad Company en Atlántida, controlaban cerca de 264 mil hectáreas de tierras (Iborra, 2021). Esta expansión generó el desplazamiento forzado de comunidades garífunas para la construcción de puertos e infraestructuras¹⁸, así como la inmigración de garífunas hacia ciudades urbanas como Puerto Cortés y San Pedro Sula. Otros garífunas se incorporaron en la economía bananera como jornaleros agrícolas en ciudades como Tela y La Ceiba (Iborra, 2020).

La apertura de rutas comerciales del banano también motivó a muchos garífunas a incorporarse como tripulantes en barcos mercantes, lo que les permitió establecer los primeros asentamientos garífunas en ciudades como Nueva York y Boston (Iborra, 2021). Tras la huelga bananera de 1954,¹⁹ las oportunidades laborales en las plantaciones se redujeron. Este evento dio origen a un nuevo ciclo de migración garífuna hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula y Estados Unidos. Además, con la experiencia organizativa de la huelga, los garífunas comenzaron a formar nuevas organizaciones que abordaron temas de discriminación racial y los derechos civiles (Iborra, 2019).

En las décadas de 1960 y 1970, se dieron una serie de reformas agrarias que impulsaron la ocupación de territorios garífunas por sectores campesinos en búsqueda de tierras que habían

¹⁷ El gobierno otorgaba a las compañías bananeras el derecho a usufructuar por un periodo de 75 años, cada kilómetro de ferrocarril construido en la línea principal. Además, confería el derecho de administración del ferrocarril y del muelle, por un periodo de 99 años y la exención del pago de todo tipo de impuestos fiscales o municipales (Palma, 2019).

¹⁸ La comunidad garífuna de Armenia (hoy Nueva Armenia) fue desplazada forzosamente de su territorio por el enclave bananero; tras la salida de la transnacional, las tierras se convirtieron en un objetivo importante para la expansión de la palma africana, ignorando los reclamos de la comunidad sobre su territorio ancestral (Picado, 2014).

¹⁹ La huelga inició en mayo de 1954, y fue liderada por parte de trabajadores agrícolas organizados que exigían la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, la huelga no logró responder a las demandas y las empresas despidieron a miles de trabajadores, quienes años después dieron vida al movimiento campesino (Argueta y Walter, 2020).

sido abandonadas por las compañías bananeras.²⁰ Estas reformas contribuyeron a su vez a la expansión de la ganadería y la llegada de la palma africana para la agroexportación a través del “Proyecto del Bajo Aguán” (León, 2017; Loperena, 2023).²¹ En esta misma época, surge la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), organización de base de las comunidades garífunas que trabaja en la defensa y demandas de los derechos culturales y territoriales.

En los años ochenta, con el “enclave palmero” en auge y conflictos armados emergiendo en la región centroamericana, en Trujillo se instalaría el primer “enclave militar”, bajo el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Iborra, 2021). El gobierno de Honduras cedió cerca de seis mil hectáreas al ejército estadounidense para establecer el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM)²² el cual funcionaría para combatir las ideologías o movimientos que en Centroamérica favorecieran o apoyaran al comunismo (Argueta y Walter, 2020). Este fue un contexto hostil para cualquier expresión social en la zona, incluyendo a las comunidades garífunas en Puerto Castilla, quienes fueron desplazados en 1976 para la instalación y desarrollo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) (Oxfam, 2016).

En los años noventa, durante la administración de Rafael Callejas del PN, se implementaron una serie de políticas neoliberales que constituyeron la base normativa para la embestida de la agroindustria, el turismo costero y el desarrollo inmobiliario en territorio garífuna (Brondo, 2018). La nueva Ley Municipal,²³ por ejemplo, otorgó más poder y autonomía a los gobiernos municipales para administrar y legitimar la venta y transferencia de derechos de propiedad dentro de los territorios ancestrales (Loperena, 2023). El pueblo garífuna también enfrentó la contrarreforma agraria, basada en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, apoyada por USAID y el BM. A partir de dicha ley, se iniciaría un nuevo proceso de titulación sobre los títulos ancestrales que ya estaban debidamente registrados, además de la privatización de las tierras de cooperativas que producían palma africana en el Bajo Aguán²⁴ (Waxenecker, 2019; Mollett, 2014).

²⁰ El enclave bananero finalizó en 1975; sin embargo, la mayoría de las compañías continuaron con sus operaciones. En la actualidad, Honduras forma parte de la red de países productores de piña y banano de la Dole Food Company, que adquirió a la Standard Fruit Company en 1965 (Palma, 2019).

²¹ La introducción de la palma ya había ocurrido en 1926, cuando la UFCO estableció viveros de palma en el jardín botánico de Lancetilla, en Tela, como una posible alternativa al cultivo de banano, ante la proliferación del hongo *Fusarium*, también conocido como el mal de Panamá (PRISMA, 2024).

²² Cuando el CREM finalizó sus operaciones en 1990, las tierras quedaron a la deriva del Estado, quien, bajo el amparo de la contra reforma agraria, vendió las tierras a corporaciones, policías, militares, ganaderos y políticos (Oxfam, 2016).

²³ La Ley Agraria prohibía que los títulos ejidales o colectivos fueran vendidos o hipotecados sin la autorización del INA. Para evitar este inconveniente, el presidente Callejas aprobó en 1993 la nueva Ley Municipal.

²⁴ En los noventa se produjo la concentración de estas tierras en manos de unos pocos núcleos empresariales: más del 70% de las tierras fue vendida a unos pocos terratenientes, incluyendo Facussé, Canales y Morales (Waxenecker, 2019).

El INA emitió los nuevos títulos bajo la categoría de “ocupación”. Sin el derecho pleno, los garífunas perdieron importantes extensiones de tierra costera, de cultivo y territorios de importancia espiritual, que habían sido utilizados durante más de un siglo mediante el uso generacional; pues todo lo que se encontraba más allá de las fronteras mapeadas se volvió “abierto” a la compra extranjera y a los proyectos de desarrollo (Brondo, 2018).²⁵ Tras el paso del Huracán Mitch en 1998, esta situación se intensificaría, pues el turismo apuntaba a convertirse en la prioridad para la recuperación económica del país²⁶ (OFRANEH, 2007). En ese momento, las iniciativas de turismo se articularon con las propuestas regionales de conservación y turismo en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá),²⁷ el cual incluía un Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), un sistema unificado de áreas protegidas que abarca todo el istmo (Loperena, 2023).

Bajo este contexto, el Estado comenzó a implementar una serie de políticas de conservación enfocadas en la ampliación de áreas protegidas, financiadas principalmente por USAID y el BM (Loperena, 2016). Las zonas designadas para la conservación, como el Parque Nacional Punta Izopo y el Parque Nacional Jeannette Kawas en Tela, en el departamento de Atlántida, pasaron a formar parte del CBM, restringiendo aún más las prácticas ancestrales del territorio garífuna, el cual también se vio amenazado por el auge del ecoturismo²⁸ (OFRANEH, 2010; Loperena, 2023).

Principales Dinámicas Territoriales

El impacto de todo este andamiaje legal en el pueblo garífuna se ilustra a través del “Proyecto Bahía de Tela”, hoy conocido como “Indura Beach and Golf Resort”²⁹. Esta fue una propuesta que comenzó a articularse desde la década de los setenta, pero que logró concretarse en el marco del Proyecto Mesoamérica y el gobierno de Manuel Zelaya en 2007 (OFRANEH, 2007). La trayectoria de este megaproyecto ha estado marcada por el despojo, desplazamientos forzosos, incluyendo la criminalización contra los garífunas que residían cerca del complejo turístico (Loperena, 2023). Mientras las comunidades denunciaban los impactos del proyecto

²⁵ En respuesta a dicha presión territorial, las comunidades iniciaron un fuerte ciclo de movilización con el fin de demandar el reconocimiento de sus títulos colectivos. Estos esfuerzos culminaron en 1996 con la organización de la Marcha por la Justicia y el Desarrollo de los Pueblos, popularmente conocida como “La Marcha de los Tambores” (Iborra, 2020).

²⁶ Con el paso del Mitch se impulsó un nuevo ciclo de migración garífuna hacia Estados Unidos.

²⁷ Las agencias internacionales de ayuda y desarrollo también insistieron en que la cogestión de áreas protegidas era la única forma de lograr el uso sostenible de los recursos naturales y mitigar los riesgos potenciales de los desastres naturales. Esto se complementó con una serie de ordenanzas de protección ambiental, así como una mayor colaboración entre el sector público y las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales privadas para lograr objetivos de conservación ambiental junto con una sólida agenda de turismo (Loperena, 2016).

²⁸ El ecoturismo surgió como una estrategia clave para el desarrollo promovida por la élite económica. Un caso emblemático es Punta Izopo. La declaración de esta área a principios de los noventa, primero como refugio de vida silvestre y más adelante como parque natural, facilitó su privatización. Este proceso fue impulsado por un empresario de la palma, que condujo la siembra masiva de cultivo y la promoción de establecimientos turísticos (Iborra, 2019).

²⁹ Indura, ahora pertenece a la colección de lujo del Hilton conocida como «Colección Curio».

hacia su territorio y ecosistemas, este recibía financiamiento del BID a través del Programa Nacional de Turismo Sostenible y de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés)³⁰ del BM, develando la estrecha relación entre los sectores público y privado, pues las élites más poderosas del país han sido las principales promotoras (Global Witness, 2017).

En el marco de la iniciativa *Honduras is Open for Business*, el PN puso en marcha la primera fase de Indura (abril, 2014), utilizando la diferencia cultural y racial del pueblo garífuna para *promover una marca única de turismo hondureño* (Loperena, 2023). En mayo del mismo año, la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz celebraba su audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado hondureño, tras haber violentado sus derechos territoriales al permitir la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela, la venta de títulos de propiedad a terceros, la autorización para proyectos turísticos y la creación de áreas protegidas sobre el territorio ancestral de la comunidad (CIDH, 2015).

Tras la crisis del 2009, en la bahía de Trujillo, empresas de capital canadiense³¹ aprovecharon la coyuntura del golpe de Estado para incrementar su presencia, exacerbando la usurpación de territorios garífunas (PRISMA, 2022). Los proyectos más notorios han sido el puerto para cruceros “*Banana Coast*” y Life Vision, para el desarrollo inmobiliario (Iborra, 2021). OFRANEH (2017) señala que estos proyectos han sido implementados con el apoyo de las autoridades estatales y la élite dominante, quienes, al igual que en los años noventa, han promovido marcos legales para permitir la extranjerización del litoral atlántico, tal como lo demuestra el Decreto 120-2013, referente a la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Desde el inicio, el propósito de las ZEDE ha sido desarrollar grandes complejos turísticos financiados por el capital extranjero en zonas que se consideran despobladas según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica.³² El caso de ZEDE Próspera indica lo contrario: en 2020, Próspera fue anunciada como la primera ZEDE para instalarse en el departamento de Islas de la Bahía, con el financiamiento del BID, y sin llevar a cabo el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) a las comunidades del pueblo garífuna (CESPAD, 2021).³³ En febrero de 2022, el gobierno de Castro inició un proceso para la derogación del Decreto 120-2013,³⁴ el cual finalizó en 2024 con el fallo de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de

³⁰ Entre 2007 y 2011, la CFI proporcionó US\$86.5 millones al banco Ficohsa, uno de los inversores del hotel Indura.

³¹ Goodwin (2017) señala que el gobierno de Canadá y empresarios canadienses se articularon para crear condiciones favorables de inversión en áreas como la minería, la manufactura y el turismo en el litoral atlántico, a través del Tratado de Libre Comercio firmado en 2011 entre ambos países.

³² https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley_zonas_empleo_desarrollo_eco_2013.pdf

³³ En 2021, OFRANEH presentó ante la CIDH una petición frente a la amenaza de posibles disoluciones a sus títulos comunitarios, pues la ZEDE impactaría en 20 de sus 47 comunidades (PRISMA, 2022).

³⁴ Al inicio del mandato de Xiomara Castro, se comprometió a “desmontar las ZEDEs y desmilitarizar a la ciudadanía”, lo que generó expectativas de cambio para el movimiento social. Respecto a la promesa de la desmilitarización, esta ha sido cuestionada, cuando en noviembre de 2022, militares y policías desalojaron a la comunidad garífuna de Punta Gorda en Islas de la Bahía como parte de un “desalojo preventivo” en función de la ZEDE Próspera, lo que llevó a la criminalización y encarcelamiento de algunos de sus líderes y lideresas.

Justicia (CSJ)³⁵ (Criterio.hh, 2024a). Estas acciones, provocaron que la empresa estadounidense Próspera presentará una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Resolución de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM contra el Estado hondureño, por el incumplimiento de los acuerdos comerciales establecidos en el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR (BHRCC, 2023).

Por otra parte, el auge del turismo no significó una disminución de las dinámicas extractivas; estas crecieron en paralelo, como ejes de desarrollo correspondientes al período de recuperación posterior al Mitch³⁶ y se acentuaron con la crisis que siguió al golpe de Estado. Desde el 2010, por ejemplo, se aprobaron una serie de licencias ambientales de manera irregular para el establecimiento de proyectos energéticos como el caso de la represa hidroeléctrica *La Enseñada*, en Atlántida y el proyecto *Masca* (conocido como Hidromasca) en Cortés. Hidromasca fue implementado bajo el programa de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Fondo de Carbono de las Naciones Unidas, provocando un oleaje de violencia, represiones y asesinatos hacia líderes garífunas, que denunciaban la falta de CPLI y la privatización del recurso hídrico (EJAtlas, 2022).

En el caso de la palma africana, desde los años noventa comenzó a extenderse desde el Bajo Aguán hacia el litoral atlántico, con una extensión cercana a las 200 mil hectáreas, abarcando en la actualidad el 80% del territorio garífuna (SAG, 2024; PRISMA, 2022). Este crecimiento ha estado acompañado por el financiamiento del Estado a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con aportes del BM y del BID (SAG, 2024; León, 2017).³⁷ A mediados de los años dos mil, el cultivo comenzó a consolidarse de forma más agresiva a medida que las tácticas de interdicción de drogas de Estados Unidos en México y el Caribe provocaban la influencia de carteles en el litoral atlántico y la Muskitia, donde comenzaron a acaparar las tierras para establecer el control territorial y blanquear el capital ilícito a través del cultivo de la palma y otros proyectos de inversión extractiva (Spring, 2020; Tellman et al, 2021).³⁸

El aumento del flujo de cocaína a través del país disparó la violencia e inseguridad, provocando una mayor militarización por parte del Estado,³⁹, financiada por las estrategias regionales de

³⁵ La normativa de las ZEDES vulneró artículos pétreos, que son principios constitucionales inmodificables.

³⁶ Como se indicó en la primera sección, el Congreso aprobó unos meses después del Mitch la Ley de Minería, que proporcionó a las corporaciones mineras extranjeras un mayor acceso a los abundantes recursos de tierra, agua y minerales del país, en particular metales preciosos. Después del golpe, el Congreso dirigió la atención al diseño de una nueva ley minera que se introdujo en 2013 y la aprobación de diversos proyectos energéticos (Mejía, 2011).

³⁷ Durante las últimas cuatro décadas, el cultivo se ha posicionado como el segundo generador de divisas en la agroexportación de Honduras después del café (PRISMA, 2024).

³⁸ Spring (2020) señala que narcotraficantes también crearon empresas que luego recibieron contratos gubernamentales y concesiones para reparar o construir importantes autopistas, represas hidroeléctricas y proyectos de energía solar, encubriendo así sus actividades ilícitas.

³⁹ Estrada (2024) y Hristov y Spring (2021) señalan que el despliegue militar se ha convertido en un instrumento al servicio de la expansión y consolidación del capital nacional y transnacional. Con el aumento del narcotráfico, este

seguridad. Esto generó mayores índices de violencia, pues la fuerza militar no solo se ha utilizado para frenar las actividades ilícitas, sino para ampliarlas y reprimir la lucha del pueblo garífuna y campesino frente a la expansión de la palma (PRISMA, 2012). Entre 2008 y 2019, el pueblo garífuna registró más de cien hechos de violencia, entre asesinatos y desapariciones, mientras que, ciento doce campesinos fueron asesinados entre el 2010-2014 a raíz de la conflictividad de la tierra en el Bajo Aguán (CIDH, 2014; Contra Corriente, 2020).

Tras el golpe de Estado, miles de hectáreas destinadas a la agricultura de subsistencia comenzaron a transferirse de manera “fraudulenta y coercitiva” hacia la agroindustria de la palma,⁴⁰ luego que el CAFTA-DR y el Proyecto Mesoamericano de Biocombustibles, liderado por Colombia, reforzaran su rol como cultivo para la exportación y la producción de biocombustibles (LVC-CESPAD, 2015; The Guardian, 2014). Frente a esta tendencia regional, empresarios de la palma aseguraron la lealtad de actores estatales y militares para extender sus plantaciones y exportar los productos de la palma y biocombustibles hacia el mercado centroamericano y europeo (ICR, 2024). Al mismo tiempo que recibieron financiamiento de la IFC y otros bancos de desarrollo, a pesar de la situación de derechos humanos⁴¹ y los vínculos con el crimen organizado, debido a la existencia de pistas clandestinas en medio de las plantaciones de palma (Global Witness, 2017).

■ La Muskitia hondureña

La Muskitia hondureña es un territorio de 1.5 millones de hectáreas que se extiende sobre el actual departamento de Gracias a Dios. En esta región, se encuentran los pueblos Pech, Tawahka, Garífuna y Miskitu, que ancestralmente han habitado el territorio.⁴² El pueblo miskitu representa el 85% de la población y su historia de resistencia, lucha por la soberanía y reclamos sobre los derechos territoriales parte desde el imperialismo británico y la trayectoria de un Estado hondureño influenciado por diversos intereses extranjeros.

Entre los siglos XVII y XIX, a la región se le conoció como el Reino Mosquito, el cual fue una confederación de pueblos amerindios y afrodescendientes que existió en la costa caribeña de Honduras y Nicaragua bajo el protectorado británico (Galeana, 2022). Los ingleses estaban interesados en la Muskitia como un lugar estratégico para extraer sus recursos naturales, además de ver en los miskitus aliados claves en su intento de contener la colonización española

vínculo se ha transformado en una simbiosis donde el narcotráfico se entrelaza con el capital, facilitando beneficios, mientras que los niveles más altos del Estado emplean a las fuerzas de seguridad para asegurar el despliegue de las actividades ilícitas.

⁴⁰ El gobierno anunció el Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras, a través de la producción de granos básicos. En la práctica, este programa favoreció la producción de palma para la exportación.

⁴¹ Entre el 2009-2017, la IFC desembolsó préstamos millonarios hacia empresas productoras de palma (Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, 2020).

⁴² Durante el período colonial, la Costa Mosquito se convirtió en una “zona de refugio” para las poblaciones indígenas del centro y occidente de Honduras, que escaparon del trabajo forzado y la dominación española (Galeana, 2021).

y a la vez para expandir las colonias y el comercio británico en el Caribe (Galeana, 2021; Ghotme, 2012a). En 1850, la hegemonía estadounidense trató de reducir la influencia británica en Centroamérica para asegurar la neutralidad de una ruta interoceánica (Galeana, 2021).

Este contexto provocó que Gran Bretaña finalizara su protectorado a través del Tratado de Wykes-Cruz, en 1859, entregando los territorios conquistados de Islas de la Bahía y La Muskitia al gobierno hondureño, bajo la condición de ser devueltos a sus propietarios originales, los pueblos indígenas (Galeana, 2022). Tras la salida de los británicos, el gobierno hondureño no cumplió con las garantías del tratado, impulsando programas de colonización principalmente para inmigrantes europeos; sin embargo, no tuvo éxito; mientras que la llegada de hondureños de ascendencia mestiza (conocidos como ladinos) se mantuvo baja (Galeana, 2021; MASTA, 2012). Posteriormente en 1894, el territorio nuevamente resurgiría como prioridad nacional como parte de los esfuerzos por aclarar la frontera entre Honduras y Nicaragua, situación que se prolongó hasta 1957 bajo la Guerra de Mocerón (Galeana, 2021).⁴³

Reformas agrarias y el avance de la frontera agrícola: Ciclos de invasión en la Muskitia

Los proyectos de colonización impulsados por el Estado en la década de los setenta, a través del “Proyecto del Bajo Aguán” y junto con los caminos establecidos por los madereros a mediados de los sesenta,⁴⁴ llevaron a un gran número de agricultores ladinos al oriente de la Muskitia; marcando así el origen de los ciclos de invasión que prevalecen hasta hoy (Herlihy y Tappan 2019; PRISMA, 2012). Los miskitus, aceptaron hasta cierto punto, a los ladinos que practicaban la agricultura de baja intensidad. Sin embargo, un mayor número de ellos dificultó la integración, generando gran preocupación para los miskitus a finales de la década (Galeana, 2021).

En los años ochenta, las instalaciones militares⁴⁵ y los campos de refugiados del conflicto entre la Contra y los sandinistas empujaron aún más la colonización de ladinos a las cuencas de los

⁴³ En 1894, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado de Bonilla-Gómez para delimitar la frontera, pero no lograron aclarar el tramo entre el pueblo de Portillo Teotecacinte en Nicaragua hasta el Atlántico. En 1906, el arbitraje del rey español Alfonso XIII ratificó el río Wangki (también conocido como Segovia o Coco) como frontera natural, pero el gobierno nicaragüense rechazó el veredicto y continuó reclamando una franja de tierra al norte de la frontera hasta el río Kruta. En 1937, las tensiones volvieron a aumentar, cuando Nicaragua emitió un sello postal que mostraba un mapa del país que incluía el territorio en disputa. Este precedente llevó al enfrentamiento militar entre ambos países en febrero de 1957, que dio como resultado la retirada definitiva del estado nicaragüense al norte del Río Coco (Galeana, 2021).

⁴⁴ Las primeras concesiones se dieron en la época colonial, por parte de las autoridades españolas a súbditos ingleses primero, extrayendo palo de Brasil, más tarde explotando los bosques de caoba. De esa forma, la extracción de la madera en la zona estuvo en manos de extranjeros. Aunque su verdadera época de auge se dio en la primera mitad del siglo XIX.

⁴⁵ El territorio miskitu se volvió clave para las tácticas de la Guerra Fría. El gobierno hondureño, bajo las directrices de Estados Unidos, ayudó a la Contra y permitió la instalación de campamentos militares destinados a los rebeldes

ríos Patuca y Coco (Herlihy y Tappan, 2019). Cuando la resistencia indígena en Nicaragua logró negociar un estatus de autonomía, inspiró a los miskitus de Honduras a politizar su identidad étnica. Sin embargo, el Estado hondureño no aceptó el activismo político y, hacia finales de la década, el pueblo miskitu comenzó a movilizarse, representado por MASTA,⁴⁶ como su máxima autoridad, y la Agencia para el Desarrollo de la Muskitia (MOPAWI), exigiendo un proceso de legalización de títulos de propiedad que protegieran sus tierras contra el avance de la frontera agrícola y la acelerada deforestación sobre sus ecosistemas⁴⁷ (Galeana, 2022).

Simultáneamente, la conservación de los recursos naturales surgía como otra área de preocupación con la creación de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP). Además de ser la primera reserva creada en Centroamérica, en 1982 recibió reconocimiento oficial de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (PRISMA, 2012). El estatus de reserva impedía a las comunidades indígenas reclamar sus derechos sobre la tierra, mientras que desde el Estado se nacionalizaba a la Muskitia, dando la impresión a los ladinos de estar disponible para ser tomada, impulsando la tala ilegal y la conversión de importantes hectáreas de bosque a tierras agrícolas (Galeana 2021; PRISMA, 2016). La contrarreforma agraria de 1992⁴⁸ aceleró aún más estas presiones, con la adjudicación de una concesión forestal a la empresa canadiense Stone Container y la construcción del proyecto hidroeléctrico conocido como Patuca (PRISMA, 2012).

Para los años dos mil, intereses nacionales e internacionales intentaron imponer modelos de privatización de tierras individuales, pero MASTA denunció constantemente tales propuestas, al no estar alineadas con la realidad de uso de la tierra del pueblo Miskitu⁴⁹ (Herlihy y Tappan, 2019). La estrategia de MASTA fue incidir para la aprobación de una nueva Ley de Propiedad (2004) en la que se incluyó un capítulo completo referente al derecho de titulación de las tierras

miskitu que luchaban contra el régimen sandinista en Nicaragua (Galeana, 2022). Esta ocupación incluyó la Isla del Cisne, en los Cayos Miskitu, la cual fue utilizada como centro de operaciones del Comando Sur con el objetivo de desestabilizar la Revolución Cubana en la década de 1960.

⁴⁶ Los antecedentes organizativos de Miskitu Asla Takanka – MASTA (Unidad del Pueblo Miskitu) datan de 1970, cuando estudiantes y profesionales miskitus que residían en Tegucigalpa formaron la Asociación de Estudiantes de Gracias a Dios (OEGAD), una organización con el objetivo de buscar apoyo para estudiantes miskitus. Posteriormente, los miembros de la OEGAD comenzaron a hacer planes para una organización que también pudiera representar al departamento de Gracias a Dios. Así, en 1976, organizaron la creación de MASTA.

⁴⁷ En esa misma época, donantes extranjeros comenzaron a llegar a la Muskitia, lo que preparó el terreno para una nueva relación de dependencia por parte de la población local (Galeana, 2021).

⁴⁸ Bajo la contrarreforma de 1992 también se permitió la restitución de las tierras con cobertura forestal que habían sido nacionalizadas en 1974 a sus propietarios originales, principalmente individuales y municipalidades, posibilitando el reclamo de los títulos de propiedad dentro de la RHBRP (PRISMA, 2016).

⁴⁹ En 2004, el Programa de Administración de Tierras en Honduras (PATH), del BM desarrolló un plan piloto para delimitar y titular tierras garífunas y miskitus. Sin embargo, el proyecto fue criticado por los líderes indígenas por no proporcionar un solo título o resultado tangible en la Muskitia. Mientras que el pueblo garífuna exigió una investigación del proyecto, alegando que el banco no había considerado sus derechos e intereses (Herlihy y Tappan, 2019).

de los pueblos indígenas (PRISMA, 2016).⁵⁰ Después del golpe de Estado, el gobierno hondureño emitió títulos de propiedad a nombre de los Consejos Territoriales,⁵¹ oficializando de esta manera, el sistema ancestral de derechos comunitarios. Sin embargo, las múltiples y persistentes presiones sobre los recursos naturales y territorios titulados, combinado con la presencia del narcotráfico, han limitado la capacidad real para ejercer y hacer valer tales derechos.

Principales dinámicas territoriales

La ganadería y la palma africana son las dos actividades económicas con mayor presencia en las zonas fronterizas a la Moskitia, acentuando los patrones de inmigración de ladinos o colonos en búsqueda de tierra, donde talan y queman áreas importantes de bosque para luego transformarlas en tierras agrícolas. A partir de la década de los noventa, este tipo de tierras comenzaron a titularse bajo la categoría de “mejoras”; de esta forma, los colonos encontraron una forma legítima de reclamar las tierras y transferirlas a otros colonos, convirtiéndose así en propietarios de facto,⁵² pues este tipo de práctica difiere del sistema de tenencia del pueblo Miskitu y se prohíbe en la Ley de Áreas Protegidas (Galeana; 2021; Herlihy y Tappan, 2019). Con el despliegue de las actividades ilícitas en el litoral atlántico y la Moskitia a mediados de los años dos mil, la interrelación entre “colonos y deforestación” comenzó a acentuarse. Debido a que los narcotraficantes intensificaron la construcción de pistas de aterrizaje para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, al mismo tiempo que impulsaron la ganadería ilegal o narcoganadería como otra manera de lavar el dinero ilícito (PRISMA, 2022). Mientras que los colonos colaboran protegiendo las pistas de aterrizaje, reciben cargamentos de droga y mantienen las operaciones de ganado para los terratenientes ausentes,⁵³ al mismo tiempo que “reclaman sus propias tierras” y se oponen al saneamiento de los registros de propiedad⁵⁴ (InSight Crime, 2022).

⁵⁰ La Ley de Propiedad también establece que los colonos que no tengan un título válido tendrían que desalojar la tierra, pero también permite la negociación de acuerdos de arrendamiento con las comunidades. La posición oficial de MASTA es que los colonos deben ser desalojados para restituir esas tierras a las comunidades miskitus. Este proceso de restitución implicaría desalojar a cientos de colonos que se han apoderado de grandes franjas de tierra y zonas forestales. Algunos de ellos están involucrados en el tráfico de drogas.

⁵¹ Entre 1998 y 2011 el pueblo Miskitu se ha organizado en total 12 Consejos Territoriales y sus respectivos Consejos Comunales, como estructura de base de MASTA. El gobierno de Zelaya (2006-09) nunca se comprometió con la titulación de los Consejos Territoriales. De hecho, intentó atraer inversión taiwanesa para construir el controvertido proyecto hidroeléctrico Patuca III, que afectó a las comunidades indígenas de La Moskitia ubicadas río abajo (Galeana, 2021).

⁵² En la década de 1990 se titulaban estas tierras “mejoradas” como una forma de proporcionar capital y crédito a agricultores individuales, provocando la destrucción desenfrenada de los bosques de la región y los recursos naturales.

⁵³ Los propietarios son empresarios y terratenientes de Olancho y Colón que emplean colonos para el manejo del ganado.

⁵⁴ Saneamiento es el procedimiento legal que determina quiénes son los dueños legales de la tierra y quiénes han obtenido la tierra por medio de procedimientos irregulares (Iborra, 2019).

Este contexto provocó en 2019 una serie de protestas protagonizadas por la población miskitu, que culminó con la creación de una subcomisión para abordar el saneamiento del territorio. Cuando parecía echarse a andar, la llegada de la pandemia por Covid-19 en 2020 detuvo el proceso debido al confinamiento, impulsando un nuevo ciclo de deforestación, esta vez, para la construcción de una carretera ilegal o narco-carretera que atraviesa la zona de amortiguamiento de la RHBRP,⁵⁵ conectando los municipios de Dulce Nombre de Culmí en Olancho y con Wampusirpi en Gracias a Dios, así como la expansión del cultivo de coca y narco-laboratorios para su procesamiento⁵⁶ (Criterio.hn, 2024c; PRISMA, 2022).

El conjunto de todas estas dinámicas ha favorecido la acelerada pérdida de bosque en La Muskitia. De acuerdo con análisis de la plataforma Global Forest Watch, entre el 2001 y 2023, el departamento de Gracias a Dios registró la pérdida del 16% del total de su cobertura arbórea. El remanente de bosque continúa bajo estas presiones, que se intensifican cada vez más con la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental de la Muskitia y la posible construcción de dos Centros de Reclusión de Emergencia (CRE), uno ubicado en la Isla del Cisne en los Cayos Miskitus y otro en la comunidad de Mocorón (dentro del territorio del Consejo Territorial de FINZMOS)⁵⁷ (ver Mapa 2).

El caso del petróleo es un tema que se ha debatido hace más de un siglo,⁵⁸ sin embargo, fue hasta el año 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo, que se firmó un acuerdo para la exploración del hidrocarburo en las costas miskitu con la empresa británica BG Group (CESPAD, 2024a). Este acuerdo no estuvo exento de controversias, especialmente por la conexión entre el acuerdo de exploración y el apoyo del gobierno de Lobo al proceso de titulación del pueblo miskitu en ese momento (Galeana, 2021). BG Group, por su parte, aceptó pagar un canon simbólico de US\$6 millones al Estado, además de financiar obras de desarrollo social en las comunidades aledañas donde se realizarán los trabajos.⁵⁹

⁵⁵ De acuerdo con Mongabay (2021), líderes indígenas fueron presionados para firmar acuerdos ilegales mediante los que se permitía la construcción de la carretera.

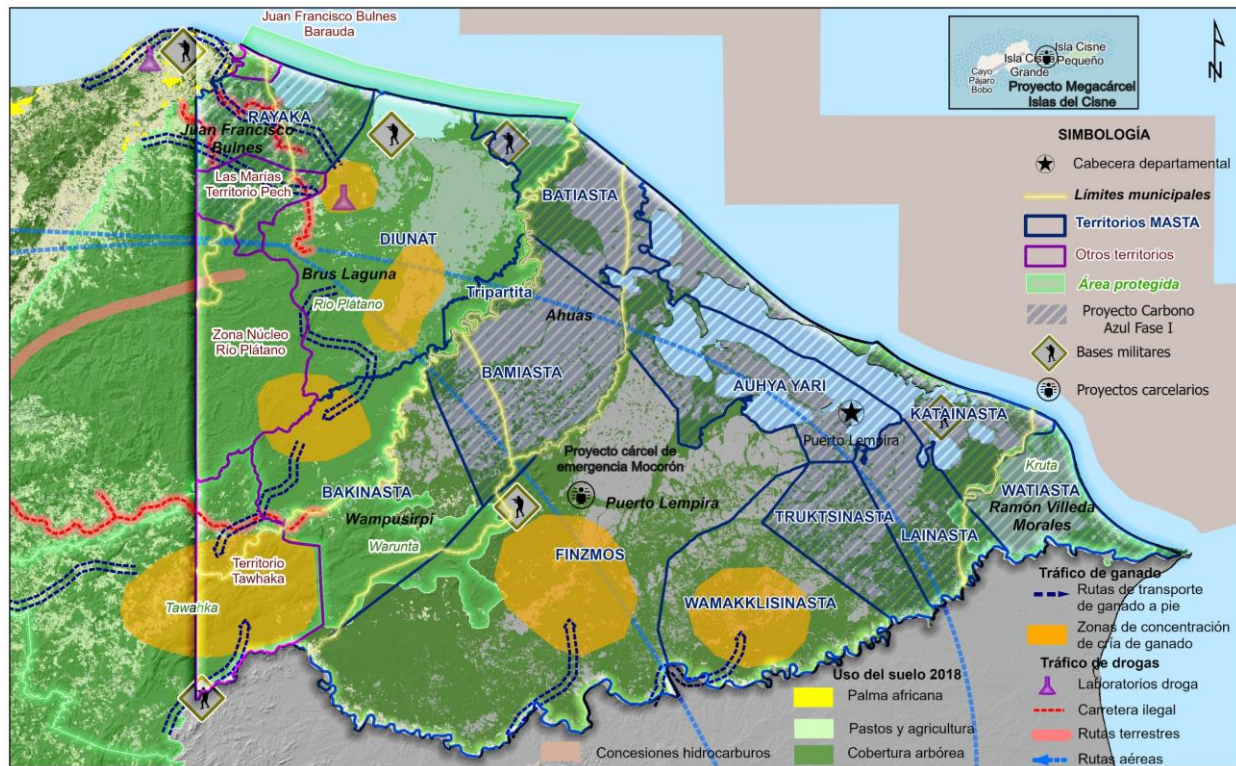
⁵⁶ El cultivo de coca comenzó a notarse a partir del año 2014, cuando las autoridades encontraron plantaciones y laboratorios para su procesamiento en los departamentos de Colón y Olancho. De acuerdo con InSight Crime (2023), la repentina aparición del cultivo puede estar atribuida a carteles de Guatemala, Colombia y México.

⁵⁷ A través del Decreto Ejecutivo PCM 29-2023, el Estado anunció la construcción de dichos centros penitenciarios.

⁵⁸ Honduras tiene cinco zonas de potencial petrolífero, pero dos son las de mayor posibilidad: en la Bahía de Tela y la plataforma marítima de la Muskitia.

⁵⁹ De acuerdo con CESPAD (2024a), MASTA tiene entre sus archivos la copia de un documento que fue firmado por los 12 Consejos Territoriales, el 15 de octubre del 2013, conteniendo 17 puntos que los liderazgos acordaron en ese entonces y que le entregaron a BG Group. La empresa se comprometió a cumplirlos, inicialmente enmarcada en el concepto de responsabilidad solidaria, sin embargo, una década después, los acuerdos no fueron cumplidos.

Mapa 2
Dinámicas territoriales en la Muskitia



Fuente: Elaboración propia según InsightCrime (2022); PRISMA (2012); Consejo de Investigaciones del Caribe Centroamericano (CCARC) (2003); Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) (2022); Map data OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

El contrato de exploración fue adquirido posteriormente por otras empresas de hidrocarburos (AziPetrol Honduras S.A. (después High Power Petroleum) y CaribX (Uk) Limited), a través de procedimientos que se hicieron al margen de la opinión y consultas con los pueblos indígenas de la Muskitia. El pueblo garífuna que habita en la zona denunció esta situación, pues el contrato se basa en la Ley de Hidrocarburos de 1984, una normativa desactualizada y reformada hasta en tres ocasiones, y no incluye un proceso adecuado de CPLI ni compensación ambiental⁶⁰ (CESPAD, 2024a; Contra Corriente, 2022).

Algo similar ocurre con las iniciativas vinculadas con el mercado de carbono. En 2017, la ONG Ayuda en Acción y la empresa suiza South Pole llevaron a cabo una propuesta para la compensación de carbono en los manglares de la Muskitia.⁶¹ El proyecto fue diseñado para

⁶⁰ Una investigación realizada por Criterio.hn a inicios del 2024 señala que el contrato originalmente habría expirado en julio de 2019, sin embargo, en 2022 bajo el gobierno de Castro dicho contrato aún seguía vigente y con un proceso de prórroga iniciado en 2020.

⁶¹ El proyecto se planteó dentro del marco REDD de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) y Restauración y Conservación de Humedales (WRC).

realizar capturas de carbono azul por 30 años en ocho consejos territoriales del pueblo miskitu y un consejo Pech. Sin embargo, la propuesta fue denunciada ante el Ministerio Público por la falta de un proceso adecuado de CPLI (Contra Corriente, 2024).

Pese a las preocupaciones del pueblo miskitu y de las comunidades indígenas en general, el Estado sigue sin adoptar el Acuerdo de Escazú, el cual es fundamental para el cumplimiento del derecho a la libre determinación y la protección de los recursos naturales. Por el contrario, ha anunciado una serie de convenios y marcos legales, como el caso de la Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática, a través de la cual el Estado busca entrar a un mercado regulado de carbono y aliviar la carga financiera del país (Contra Corriente, 2024).⁶² La firma de un memorándum de entendimiento y de cooperación entre la Secretaría de Energía (SEN) y la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), que deja abierta la posibilidad de futuras exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. Así como el decreto sobre la “Estrategia Cero Deforestación al 2029” que busca al igual que los gobiernos anteriores, frenar la deforestación, defender las áreas naturales protegidas y el avance de las actividades ilícitas a través del despliegue militar en la Muskitia y otras regiones de interés.⁶³

Dicha estrategia ha dado lugar a contradicciones, pues ha surgido evidencia de una nueva carretera ilegal, esta vez, desde el departamento de Colón hasta el núcleo de la RHBRP (Contra Corriente, 2024a). Además, se especula sobre un nuevo paso de drogas a través de la Isla del Cisne, donde el Estado ha insistido en la construcción de una cárcel de máxima seguridad (El Heraldo, 2024).⁶⁴ Esta medida ha generado diversas preocupaciones. Por un lado, la Isla del Cisne fue declarada área protegida en 1991, y la construcción de la cárcel amenaza su fragilidad ecosistémica y a los pueblos indígenas de la Muskitia. Y, por otro lado, ha puesto en mayor tensión la relación entre Honduras y Estados Unidos, pues la isla ha sido históricamente objeto de ocupación militar estadounidense y su valor geoestratégico podría estimular el interés de países como China para el establecimiento de una base militar (CESPAD, 2024d).

⁶² La ley no deja la claridad sobre cómo participarían (y se beneficiarían) las comunidades rurales y pueblos indígenas en todo el proceso relacionado con el desarrollo y funcionamiento de los mercados de carbono (CESPAD, 2024b)

⁶³ Desde 1957, tras la guerra de Mocarón, la población miskitu ha denunciado la violencia de la ocupación militar, que en 2011 fue la responsable de la muerte de cuatro miskitus al confundirlos con narcotraficantes.

⁶⁴ En septiembre del 2024 el Estado lanzó el tercer proceso de licitación para la construcción de la cárcel, pese a la inviabilidad del proyecto y las denuncias de los pueblos de la Muskitia, las cuales se han extendido ante la confirmación de la mega cárcel en Mocarón.

Rasgos del contexto geopolítico actual: Estados Unidos, México, China y Honduras

La alternativa a la profundización del modelo neoliberal seguido por el PN, representado en la elección del LIBRE de Xiomara Castro, suponía inicialmente un viraje a la situación del ‘narcoestado’ hondureño. Sin embargo, la coyuntura actual evidencia la réplica de prácticas como la corrupción, impunidad, y la continuidad del crimen organizado en complicidad con el poder político. Como signo de ello, varias leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años continúan obstaculizando la lucha contra la corrupción y han reducido la transparencia y la rendición de cuentas, a raíz de lo cual Honduras continúa excluida de los fondos de la Cuenta del Milenio;⁶⁵ pese a la promesa de campaña de Castro en 2021 de atacar la corrupción a través de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).⁶⁶

El narcotráfico, por su parte, sigue favoreciéndose de la corrupción imperante y durante la última década, Honduras pasó de ser un país de tránsito a ser también un país productor con la expansión del cultivo de hoja de coca (InSight Crime, 2023). Una preocupación que se extiende a la región, ya que recientemente un estudio develó que Honduras, Guatemala y Belice cuentan con las condiciones biofísicas adecuadas para expandir a futuro este cultivo (Murillo-Sandoval et al., 2024). Este contexto, con la reciente denuncia al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos,⁶⁷ coloca al país en una posición vulnerable, bajo el riesgo de convertirse en un nuevo refugio para redes transnacionales involucradas en el tráfico de

⁶⁵ Para acceder a los fondos, el país necesita alcanzar una evaluación del 50% en el indicador de control de la corrupción, sin embargo, el año pasado apenas logró el 9%. La última vez que Honduras accedió a los fondos fue en 2009.

⁶⁶ El gobierno de Honduras entregó a la ONU un segundo borrador de convenio para la instalación de la CICIH.

⁶⁷ El país tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos desde 1912, aunque la constitución originalmente impedía que el país extraditara a sus propios ciudadanos. Eso cambió en 2013 cuando JOH, entonces presidente del Congreso impulsó una reforma constitucional que amplió los poderes de extradición del gobierno. En 2022, al poco tiempo de dejar el poder, JOH fue extraditado, procesado y condenado a 45 años en prisión por narcotráfico, en los Estados Unidos, siguiendo las acusaciones similares que habían hecho de su hermano Tony Hernández en 2018 (Woolston, 2024).

fentanilo (Expediente Público, 2024; Estrada, 2024b). Actualmente no hay pruebas de la existencia de un comercio considerable de la droga sintética en Honduras, sin embargo, la corrupción generalizada hace al país el entorno ideal.

En 2023, el índice global de crimen organizado perfiló a Honduras como el segundo de Centroamérica con mayores conexiones entre el crimen organizado y el Estado;⁶⁸ revelando el patrón que ha persistido durante las últimas dos décadas, entre las ganancias ilícitas, funcionarios públicos y los partidos políticos. Estos últimos son señalados como los principales potenciadores de la corrupción en Honduras (Wade, 2022; Spring, 2020). En septiembre de 2024 se difundió un video que muestra a funcionarios del actual gobierno junto a un grupo de personas vinculadas con el narcotráfico, negociando financiamiento para la campaña electoral de Libre en el año 2013 (Ernst y Adams, 2024). Esta evidencia se da en un contexto marcado por la denuncia de Castro al acuerdo de extradición, aduciendo la injerencia estadounidense en su gobierno; tras su cercanía con Venezuela a través del reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales y el encuentro con autoridades militares de ese país (Criterio.hn, 2024c). AFP (2024) señala que la decisión de Castro se basó en la defensa de actores claves en su gobierno, como lo son autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, lo que indica que la sombra de los eventos de 2009 sigue presente en la política hondureña.

Esto ha generado tensiones en la relación entre Estados Unidos y Honduras, que han continuado una cooperación en temas de urgencia regional, pero con declaraciones públicas en que dejan entrever sus desacuerdos políticos, partiendo de la retórica de Castro de denominar su gobierno como socialista-democrático (Meyer, 2023). A estos desencuentros se suma el acercamiento del gobierno de Castro hacia Cuba y Nicaragua, principalmente en espacios internacionales donde ha mostrado una postura a favor de los regímenes de dichos gobiernos. Así como también la emisión de reformas legislativas al sector energético, y la preocupación de Estados Unidos por el efecto en las inversiones extranjeras, incluyendo la declaración de inconstitucionalidad de las ZEDE.⁶⁹ Además, en el establecimiento de relaciones diplomáticas formales con China en marzo de 2023 —y por ende, una ruptura con las anteriormente construidas con Taiwán—, Estados Unidos ha reconocido la situación en el marco de la soberanía hondureña, pero con advertencias sobre los alcances posibles de este acercamiento chino en Honduras (Meyer, 2023). Estas aproximaciones se reflejan en una serie de memorandos firmados que incluyen: la adhesión de Honduras a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), así como el apoyo a la Iniciativa Global de Desarrollo (Poder Popular, 2023).

Bajo este marco, la administración de Castro también ha impulsado la incorporación de Honduras a diversos bancos de los cuales China forma parte, como el caso del Banco del Desarrollo de los BRICS+ (integrado inicialmente por sus fundadores Brasil, Rusia, India, China

⁶⁸ Análisis para Honduras:

https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_honduras_2023.pdf

⁶⁹ <https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/honduras/>

y Sudáfrica) y al Banco de Exportaciones e Importaciones, para el financiamiento de proyectos principalmente en el área de energía e infraestructura.⁷⁰ Estos acercamientos deben considerarse en un contexto en que China ha aumentado su inversión extranjera directa, ligada en gran medida al sector energético, donde se contempla la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca II.⁷¹ Asimismo, China pretende obtener beneficios de la relación con Honduras en ese mismo sentido: actualmente es el principal consumidor de energía a nivel mundial (Mayer, 2022).

Ambos países se encuentran en la sexta ronda de negociación para la concreción de un Tratado de Libre Comercio (TLC), a través del cual empresas chinas esperan blindar sus capitales. Actualmente, Honduras mantiene vigentes doce TLC y bajo estos marcos, inversionistas extranjeros han presentado demandas de arbitraje contra el Estado hondureño ante el CIADI (IPS et al, 2024).⁷² La mayor parte de las demandas son de empresas cuyas inversiones fueron realizadas de manera irregular, en el contexto del “narcoestado” (nueve corresponden al sector energético) (idem). El caso más emblemático es la demanda por la ZEDE Próspera por casi US\$ 11 mil millones, lo que motivó la denuncia y salida de Castro al convenio del CIADI en 2024. Sin embargo, esta medida no ha eximido al país de recibir demandas de arbitraje, a las que ya se han sumado empresas chinas como Energy Engineering Group (El Herald, 2024b).

Bajo este panorama, las élites económicas hondureñas se han visto amenazadas, argumentando que la falta de un centro de arbitraje afecta la imagen del país como destino para las inversiones extranjeras (Criterio.hn, 2024), dada su importancia estratégica en materia logística, energética y de extracción de materias primas. Aunque la posibilidad de proyectos de gran envergadura como la extracción de petróleo *off-shore* en las costas de la Mosquitia y el ferrocarril interoceánico,⁷³ sigue dotando de relevancia geopolítica a Honduras. En el caso del petróleo, de concretarse la existencia de yacimientos, el actual gobierno ha explicitado su interés por la explotación del recurso, aunque se desconoce si serán las empresas que participan en la exploración, o empresas mexicanas, venezolanas, chinas o de otra procedencia las que finalmente extraigan el recurso (Fernández y Langhoff, 2024).

Por otro lado, el ferrocarril es un proyecto de “importancia nacional” con el cual Honduras busca consolidarse como una alternativa a las rutas interoceánicas, especialmente la del Canal de Panamá. Debido a su relevancia comercial, persisten las intenciones de actores nacionales y

⁷⁰ Secretaría de Prensa de Honduras a través de <https://x.com/gobprensaHN/status/1823570253323829361>

⁷¹ Anteriormente, China ya se encontraba vinculada con la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III a través de la empresa Sinohydro, quien en 2013 planeaba construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque.

⁷² Entre 2023 y 2024, Honduras recibió 14 demandas en el arbitraje internacional, convirtiéndose en el segundo país más demandado de América Latina en el mismo período (después de México).

⁷³ Un proyecto considerado por intereses varios desde hace al menos 3 siglos por su posición geoestratégica (Pérez Brignoli 2017). El ferrocarril interoceánico conectaría el Golfo de Fonseca (Pacífico) con Puerto Castilla (Atlántico), generando una incidencia económica directa entre Tela (Atlántida), Trujillo (Colón) y Catacamas (Olancho) (La Prensa, 2024).

de diversos actores externos como China, Reino Unido, Emiratos Árabes, incluso el interés reciente de México, para participar en la construcción de dicha obra (SRECI, 2024; La Tribuna, 2024; La Prensa, 2024a). Estados Unidos también ha mostrado el interés sobre el ferrocarril, indicando en reiteradas ocasiones la necesidad de limitar el acceso chino a este tipo de infraestructura, la cual podría desencadenar un uso de la fuerza militar en caso de conflicto (La Prensa, 2024b).

No obstante, con el reciente triunfo de Donald Trump y la experiencia ya registrada en su primer mandato, aumenta la incertidumbre sobre cómo abordará al gobierno de Castro, el cual mantiene una postura de antimperialismo estadounidense (Contra Corriente, 2024b), contraria a la experiencia del gobierno de JOH del PN. Mientras tanto, Estados Unidos continúa siendo su mayor socio comercial, el receptor principal de población emigrante hondureña y el más importante auspiciante de cooperación. Por lo pronto, China es el único país que pone en riesgo la influencia hegemónica de Estados Unidos en Honduras. Pero también lo hace en Centroamérica y el Caribe, algo que Estados Unidos reconoce y perfila como una preocupación en términos de seguridad nacional (The White House, 2022). Esto se traduce en que Honduras genera interés geopolítico tanto por su actuar en asuntos internos como por los acuerdos que toma a nivel internacional, ya sea con China, los Estados Unidos u otras naciones en el futuro (Merino y Narodowski, 2019).

Implicaciones para la gobernanza territorial

La gobernanza territorial en Honduras enfrenta un contexto geopolítico complejo y desafiante, marcado por el despojo sistemático de tierras y recursos naturales, la desarticulación institucional, la militarización y la creciente presión de actores nacionales e internacionales. El ascenso de nuevas potencias como China desafían la tradicional hegemonía estadounidense en la región, situando a los territorios en una nueva encrucijada, donde se profundiza el asedio frente a la promoción de numerosos megaproyectos de infraestructura, que buscan responder a ciertos desafíos globales como la transición energética y el cambio climático.

La influencia que ejercen estos actores no solo se refleja en el control y disputa de recursos naturales claves, sino también en la configuración de alianzas políticas y económicas que perpetúan un modelo extractivista que vulnera la autonomía y sostenibilidad de las comunidades, abriéndolas a intereses externos sobre las necesidades y derechos de los pueblos y comunidades locales.

La ausencia de salvaguardas efectivas y procesos adecuados de consulta a los pueblos y comunidades locales han debilitado las capacidades para resistir el despojo sistemático de sus recursos. Este despojo sigue patrones históricos que favorecen la concentración de tierras en manos de élites nacionales e internacionales, exacerbados por instrumentos legales y también a través de métodos coercitivos y violentos. Agravado al mismo tiempo por el deterioro de la institucionalidad y la inestabilidad política del país, creando condiciones propicias para la expropiación y deslegitimación de los derechos históricos y culturales de las comunidades sobre sus territorios ancestrales.

Además, este deterioro institucional alimenta un sentimiento generalizado de inseguridad y vulnerabilidad social, profundizando la incertidumbre y el temor en las comunidades frente a la criminalización de las resistencias. La cual ha fragmentado las redes de organización y defensa, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades y dificultando su capacidad de respuesta. Adicional a este conjunto de interacciones, los procesos de gobernanza se ven limitados por el despliegue de la militarización, a menudo justificada por la lucha contra el narcotráfico en la región, intensificando la conflictividad socioambiental.

Las comunidades enfrentan no solo despojo y fragmentación, sino también la amenaza de desplazamiento y el vaciamiento del territorio debido a la migración de jóvenes, quienes buscan escapar de la violencia y la falta de oportunidades. La migración forzada plantea interrogantes sobre el futuro de los liderazgos y la capacidad organizativa para enfrentar los desafíos futuros, la cual se agrava por la influencia de actores externos y la falta de mecanismos claros para la sucesión de liderazgos y la cohesión comunitaria.

Durante décadas, las comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras han emprendido diversas estrategias de resistencia y de defensa territorial, que van desde movilizaciones locales, nacionales e internacionales denunciando los conflictos en torno a la invasión de sus territorios, hasta propuestas de autonomía basadas en saberes ancestrales para el manejo sustentable de sus recursos naturales; amenazados cada vez más por los impactos del cambio climático y la expansión de actividades ilícitas, que se perfilan como más sofisticadas, expansivas y letales que anteriormente.⁷⁴ Otras comunidades también han seguido una lógica de negociación, como el caso de la Muskitia, estableciendo vínculos partidarios que, si bien han permitido avances como la titulación de tierras, también las ha expuesto a mayores riesgos relacionados con las inversiones extractivas y los actores ilícitos.

Para defender sus derechos, los pueblos y comunidades requieren fortalecer y crear modelos de gobernanza territorial más resilientes, inclusivos y sustentables. Para ello, el fortalecimiento de capacidades organizativas y la promoción de alianzas estratégicas a nivel local e internacional son esenciales para visibilizar estas problemáticas y avanzar hacia soluciones integrales. Un diálogo político inclusivo, que considere las especificidades de cada territorio, es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de resistencia y adaptación. Las colaboraciones estratégicas entre comunidades, instituciones nacionales y actores internacionales pueden facilitar el acceso a recursos técnicos, financieros y humanos, al tiempo que fortalecen redes de apoyo que amplifican las voces de las comunidades en los espacios de toma de decisiones.

Fomentar estas alianzas bajo principios de respeto, equidad y sostenibilidad es crucial para enfrentar los desafíos de la gobernanza territorial. Al mismo tiempo, resulta indispensable promover modelos alternativos de desarrollo que prioricen los derechos territoriales, la protección de los recursos naturales y la autodeterminación de las comunidades. Finalmente, frente a la incertidumbre y los constantes cambios, es imperativo consolidar la solidaridad entre las comunidades y cultivar un entorno que permita a las nuevas generaciones liderar con visión y compromiso.

⁷⁴ Estrada (2024) señala que este fenómeno, impulsado por la convergencia de tendencias globales como el cambio climático, la competencia geopolítica, las tecnologías disruptivas y una creciente crisis de gobernanza, plantea retos de gran magnitud para países como Honduras.

Referencias

- Altamirano Rayo, Giorleny (2021). "State Building, Ethnic Land Titling, and Transnational Organized Crime: The Case of Honduras". *Latin American Research Review* 56 (1): 50–66. <https://doi.org/10.25222/larr.450>.
- Argueta, O; Walter, K. (2020). *Una institución para todo: la función política de las FF. AA. en Honduras*. Alianza para La Paz-Fundación Heinrich Böll. <https://sv.boell.org/es/2020/10/15/una-institucion-para-todo-la-funcion-politica-de-las-ff-aa-en-honduras>
- Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) (2022). *Proyecto Hidroeléctrico Cuyamel en territorio de Garífuna en Masca, Omoa, Cortés, Honduras*. <https://www.cevreadaleti.org/conflict/cuyamel-hydroelectric-project-on-garifuna-territory-in-masca-omoa-cortes-honduras/?translate=es>
- Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) (2022a). *Zonas de Empleos y Desarrollo Económico (Zede), Honduras*. <https://ejatlas.org/conflict/zonas-de-empleo-y-desarrollo-economico-zede-ciudades-modelo-o-charter-cities-honduras/?translate=es>
- BBC Mundo (2021). "Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras y la mujer que devuelve la izquierda al poder tras el golpe de Estado contra su esposo". *BBC News Mundo*, el 1 de diciembre de 2021. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59462974>.
- Blume, L. (2024). *Honduras: Un narco-estado hecho en Estados Unidos. The North American Congress on Latin America (NACLA)*. <https://nacla.org/honduras-narco-estado-hecho-en-estados-unidos>
- Boersner, Demetrio (2004). *Relaciones internacionales de América Latina: breve historia*. Caracas, Venezuela: Editorial Nueva Sociedad.
- Brondo, K.V. (2018). "A Dot on a Map": Cartographies of Erasure in Garifuna Territory. *PoLAR Political and Legal Anthropology Review* 41(2):185-200. <https://doi.org/10.1111/plar.12272>
- Business & Human Rights Resource Centre (BHRCC) (2023). *US company Prospera sue Honduran govt for repealing laws covering economic development zones*. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/us-company-prospera-sue-honduran-govt-for-repealing-laws-covering-economic-development-zones/>
- Castillo, R. (2021). *Iseri Lidáwamari: autonomía territorial y educativa en la comunidad Garífuna de Vallecito en Honduras*. <https://repositories.lib.utexas.edu/items/44f8a727-e117-4477-8ff7-408f0c808e92>
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (2024a). *La concesión de petróleo en La Mosquitia hondureña: Una actualización desde el enfoque del respeto de la consulta a las comunidades y los derechos humanos*
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (2024b). *Mercados de carbono: oportunidades y riesgos en la justicia ambiental y ecológica en Honduras* https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2024/02/Bono-de-Carbono-WEB_compressed.pdf
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (2024c). *Islas del Cisne: ni mega prisión, ni base militar extranjera*. <https://cespad.org.hn/pronunciamiento-islas-del-cisne-ni-mega-prision-ni-base-militar-extranjera/>
- CESPAD (2021). *Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE): el caso Crawfish-Roatán Próspera* <https://v1.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2021/11/PDF-ZEDES-Prospera-Final.pdf>

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015). *Comunidad garífuna Triunfo de la cruz y sus miembros VS. Honduras. Sentencia de 8 de octubre de 2015.*

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf

CIDH (2014). *CIDH expresa preocupación por amenazas y detenciones de líderes campesinos en el Bajo Aguán, Honduras.* https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/094.asp

Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (2020). *Riesgos no calculados Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo.* https://co.boell.org/sites/default/files/2020-08/1-Riesgos-no-calculados_.pdf

Contra Corriente (2024a). *Nueva «narcocarretera» profundiza conflicto por tierras en La Moskitia.* <https://contracorriente.red/2024/02/15/nueva-narcocarretera-profundiza-conflicto-por-tierras-en-la-moskitia/>

Contra Corriente (2024b). *El viejo conocido: las elecciones en Estados Unidos y el futuro de sus relaciones con Honduras.* <https://contracorriente.red/2024/09/24/el-viejo-conocido-las-elecciones-en-estados-unidos-y-el-futuro-de-sus-relaciones-con-honduras/>

Contra Corriente (2022). *Concesión petrolera en La Mosquitia de Honduras avanza sin transparencia ni consulta* <https://contracorriente.red/2022/12/07/concesion-petrolera-en-la-mosquitia-de-honduras-avanza-sin-transparencia-ni-consulta/>

Contra Corriente (2020). *Por defender territorio y cultura, la violencia le llegó al pueblo garífuna.* <https://contracorriente.red/2020/08/02/por-defender-territorio-y-cultura-la-violencia-le-llego-al-pueblo-garifuna/>

Correal, Annie, y Megan Specia (2018). “*The Migrant Caravan: What to Know About the Thousands Traveling North*”. *The New York Times*, el 27 de octubre de 2018, sec. World. <https://www.nytimes.com/2018/10/26/world/americas/what-is-migrant-caravan-facts-history.html>.

Criterio.hn (2024a). *Fallo de inconstitucionalidad de las ZEDE es válido, la confusión gira entorno a la norma.* <https://criterio.hn/fallo-de-inconstitucionalidad-de-las-zede-es-valido-la-confusion-gira-entorno-a-la-norma/>

Criterio.hn (2024b). *La Moskitia hondureña de paso de droga a zona de cultivo de coca.* <https://criterio.hn/la-moskitia-hondurena-de-paso-de-droga-a-zona-de-cultivo-de-coca/>

Criterio.hn (2024c). *Empresa británica sin experiencia tejó red para explorar el petróleo en La Moskitia hondureña.* <https://criterio.hn/empresas-britanicas-exploran-petroleo/>

Díaz Arias, David (2021). *La construcción de las naciones centroamericanas, 1821-1954.* 1a ed. Colección Nueva Historia Contemporánea de Centroamérica - CIHAC. San José, Costa Rica. <https://api.obregon.cihac.fcs.ucr.ac.cr/obregon/api/core/bitstreams/9dc47816-1f99-45e3-bfb3-799347795439/content>.

El Heraldo (2024a). *Nasralla: Islas del Cisne sería utilizada para que la droga llegue a Estados Unidos.* <https://www.elheraldo.hn/honduras/salvador-nasralla-islas-cisne-droga-estados-unidos-CO17914204>

El Heraldo (2024b). *Empresa china demanda al Estado de Honduras por \$127 millones.* <https://www.elheraldo.hn/honduras/empresa-china-demanda-estado-honduras-127-millones-NC21107930>

El Heraldo (2023). *“Proyecto de tren interoceánico en Honduras es de 10 a 15 años”.* [www.elheraldo.hn](https://www.elheraldo.hn/honduras/proyecto-tren-interoceanico-honduras-10-a-15-anos-IA15736178). el 12 de octubre de 2023. <https://www.elheraldo.hn/honduras/proyecto-tren-interoceanico-honduras-10-a-15-anos-IA15736178>.

Elementa DDHH (2024). *“Extraditar la Verdad: Aproximaciones a los efectos de la política criminal de Estados Unidos en Honduras”.* Bogotá, Colombia. <https://elementaddhh.org/extraditar-la-verdad-aproximaciones-a-los-efectos-de-la-politica-criminal-de-estados-unidos-en-honduras/>.

- Ernst, Jeff, y David C. Adams (2024). “*Narco Video Shows Traffickers Discussing Bribes with Honduras President’s Brother-in-Law*”. InSight Crime. el 3 de septiembre de 2024. <http://insightcrime.org/news/narco-video-shows-traffickers-discussing-bribes-with-honduras-presidents-brother-in-law/>.
- Estrada, O. (2024a). *El narcotráfico, punta de lanza del neoliberalismo rural*. <https://oscarlestrada.com/blog/f/el-narcotr%C3%A1fico-punta-de-lanza-del-neoliberalismo-rural?blogcategory=narcotr%C3%A1fico>
- Estrada, O. (2024b). *Honduras y la quinta ola del crimen organizado: ¿Preparados?* <https://oscarlestrada.com/blog/f/honduras-y-la-quinta-ola-del-crimen-organizado-%C2%BFpreparados>
- Euraque, Darío A. (2022). “Honduras”. En *The Oxford handbook of Central American history*, editado por Robert H. Holden, 519–44. Oxford handbooks series. New York, NY: Oxford University Press.
- Expediente Público (2024). *Traficantes de fentanilo buscan refugio en Honduras noviembre 25, 2024* <https://www.expedientepublico.org/traficantes-de-fentanilo-buscan-refugio-en-honduras/>
- Fernández G. y Langhoff, M. (2024). *Transición ecosocial y megaproyectos en el Norte de Centroamérica*. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad. https://omal.info/IMG/pdf/transicion_eco_centroamerica_web_1.pdf
- Figueroa, Carlos (1994). “Centroamérica: Entre la crisis y la esperanza (1978-1990)”. En *Historia general de Centroamérica. Tomo VI: Historia Inmediata (1979-1991)*, editado por Edelberto Torres-Rivas, 2. ed. San José, Costa Rica: FLACSO.
- FOSDEH, et al. (2021). *Territorios en Riesgo III: Minería, hidrocarburos, y generación de energía eléctrica en Honduras*. UNAH, FOSDEH, OXFAM: Tegucigalpa.
- Galeana, F. (2022). *Vernacular legibility in counter-mapping: Assembling the geo-body of an indigenous socio-territorial movement in Honduras*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.12.007>
- Galeana, F. (2021). “*Property and indigenous state formation in the honduran moskitia*”. Doctor of Philosophy, Cornell University. <https://ecommons.cornell.edu/items/85d4d00e-9715-47d7-a2a5-5fb1cd5c82f5>
- García Buchard, Ethel (2021). “*Divergencias, aspiraciones y desilusiones en la historia reciente de Honduras, 1950-2019*”. En *Laberintos y bifurcaciones: Historia inmediata de México y América Central, 1940-2020*, 151–96. San José, Costa Rica: Centro de Investigaciones Históricas de América Central. <https://obregon.cihac.fcs.ucr.ac.cr/handle/123456789/592>.
- Gargallo, F. (2002). *Garífuna, Garínagu, Caribe. Historia de una nación libertaria*. Ciudad de México, 2002. <https://wa-dani.com/wp-content/uploads/2020/12/FrancescaGargallo-Garifunagarinagucaribe.pdf>
- Ghotme, Rafat (2012a). “*El protectorado británico en la costa Mosquitia, 1837-1849*”. *Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad* 7 (1): 45–74. <https://doi.org/10.18359/ries.91>.
- . 2012b. “*La diplomacia neogranadina en la ‘cuestión Mosquitia’ 1839-1849*”. *Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad* 7 (2): 21–52. <https://doi.org/10.18359/ries.81>.
- Global Witness (2024). “*Voces silenciadas: La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente*”. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/#memory-es>.
- Global Witness (2017). *Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta*
- Gobat, Michel (2022). “*Central America and the United States*”. En *The Oxford handbook of Central American history*, editado por Robert H. Holden, 309–34. Oxford handbooks series. New York, NY: Oxford University Press.
- Goodwin, G. (2017). *Review of Todd Gordon and Jeffery R. Webber’s. Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America*. NACLA Report on the Americas. <http://dx.doi.org/10.1080/10714839.2017.1298260>
- Granados, Carlos (1985). “*Hacia una definición de Centroamérica: El peso de los factores geopolíticos*”. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 59–78.

Guzmán, Génesis, y Andrés León (2019). "A diez años del golpe de Estado en Honduras: Entre las narrativas de la 'transición a la democracia' y la instauración del proyecto neoliberal en Centroamérica". Anuario de Estudios Centroamericanos 45 (abril):151–82. <https://doi.org/10.15517/aeca.v45i0.39670>.

Herlihy, Peter H., Matthew L. Fahrenbruch, y Taylor A. Tappan (2022). "Regaining Ground: Indigenous Populations and Territories". En The Oxford handbook of Central American history, editado por Robert H. Holden, 57–80. Oxford handbooks series. New York, NY: Oxford University Press.

Herlihy, P. H., & Tappan, T. A. (2019). *Recognizing Indigenous Miskitu Territory in Honduras*. Geographical Review, 09(1), 67-86. <https://doi.org/10.1111/gere.12309>

Hristov, J. y Spring, K. (2021). *Paramilitarism in Progress: the Low-Intensity War against Popular Mobilizations Honduras*. In Paramilitary groups and the State under Globalization: Political Violence, Elites, and Security.

Iborra, J.V. (2021). *Migración garífuna, deportaciones y asilo político en un contexto de desplazamiento forzado*. Andamios, vol. 18, núm. 45, pp. 47-76,

Iborra, J.V. (2020). *Los límites a las políticas del reconocimiento y el derecho a la consulta previa en Honduras. El caso garífuna*. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, n. 60 (julio-diciembre 2020): 51-77 e-issn 2448-5004,

Iborra, J.V. (2019). *Eibuga Hama Wayunagu Garinagu (Caminando con los ancestros garífunas)*. *Cosmopolíticas frente al despojo territorial en tiempos de la tercera expulsión*. Repositorio institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Iniciativa Cristiana Romero (CIR) (2024). *A la sombra de la palma aceitera. Informe sobre el aceite de palma 2024*. <https://www.ci-romero.de/produkt/palm-oil-report-2024/>

Inside Climate News (2024). *In Honduras, Libertarians and Legal Claims Threaten to Bankrupt a Nation*. <https://insideclimatenews.org/news/15092024/foreign-investor-legal-claims-threaten-to-bankrupt-honduras/>

InSight Crime (2023). *Cultivar y consumir el miedo: la coca hondureña* <https://insightcrime.org/es/noticias/cultivar-consumir-miedo-coca-hondurena/>

InSight Crime (2016). *Élites y Crimen Organizado en Honduras*. <https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-en-honduras/>

Institute for Policy Studies (IPS), Honduras Solidarity Network (HSN), Transnational Institute (TI), and Terra Justa (2024). *Inversiones mafiosas contra Honduras: Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño*

Krizova, Markéta (2014). "Costa de Mosquitia: en la encrucijada de los procesos atlánticos y las ambiciones locales". Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 60. <https://revistas.grancanaria.com/index.php/aea/article/view/2218>.

La Prensa (2024a). *Reino Unido interesado en proyecto de tren interoceánico*. 10 de septiembre 2024. <https://www.laprensa.hn/honduras/reino-unido-interesado-proyecto-tren-interoceanico-DF21354610>

La Prensa (2024b). *Laura Richardson advierte a Honduras: China es una amenaza*. 18 junio de 2024. <https://www.laprensa.hn/honduras/laura-richardson-advierte-china-amenaza-democracia-comando-sur-HD19922432>

La Tribuna.hn (2024). *México interesado en construcción del ferrocarril*. 01 de octubre 2024. <https://www.latribuna.hn/2024/10/01/mexico-interesado-en-construccion-del-ferrocarril/>

La Vía Campesina (LVC), CESPAD (2015). *El impacto del CAFTA-DR en la agricultura hondureña, a diez años de su vigencia*. <https://v1.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Final-Cespad-CAFTA-PDF.pdf>

Latina Republic (2021). *Honduras-Indigenous Territories and Governance*. <https://latinarepublic.com/2021/06/03/honduras-indigenous-territories-and-governance/>

- León Araya, Andrés (2017). “*Domesticando el despojo: palma africana, acaparamiento de tierras y género en el Bajo Aguán, Honduras*”. *Revista Colombiana de Antropología* 53 (1): 151–85. <https://doi.org/10.22380/2539472X.6>.
- . 2019. “*The politics of dispossession in the Honduran palm oil industry: A case study of the Bajo Aguán*”. *Journal of Rural Studies* 71:134–43. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.015>.
- Loperena, C. (2023). *The ends of Paradise: Race, Extraction, and the Struggle for Black Life in Honduras*.
- Loperena, C. (2016). *Conservation by racialized dispossession: The making of an eco-destination on Honduras's North Coast*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.07.004>
- Mapas de Honduras (s.f). <https://mapasdehonduras.com/hn/tela/>
- Mapa data OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. And its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri
- MASTA (2012). *Protocolo bio-cultural del Pueblo Indígena Miskitu*. El derecho al consentimiento libre, previo e informado en nuestro territorio de La Mosquitia hondureña.
- Mayer, Adán Nicolas (2022). “*Inversiones chinas en el sector petrolero suramericano. Una aproximación desde la gobernanza energética*”. En *Crisis mundial y geopolítica: pensar y construir el multipolarismo y el pluriversalismo para un nuevo orden mundial*, editado por Walter Formento, Evangelina González Pratx, y Juan Sebastián Schulz, 1a ed. Ciudad de Buenos Aires: Centro de Investigaciones en Política y Economía - Observatorio Internacional de la Crisis.
- Mejía, J.A. (2011). *¡Energía limpia SÍ, etnocidio NO!* - Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28046.pdf>
- Merino, Gabriel Esteban, y Patricio Narodowski, eds. (2019). *Geopolítica y economía mundial: El ascenso de China, la Era Trump y América Latina*. 1a ed. La Plata, Argentina: Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) - CONICET.
- Meyer, Peter (2023). “*Honduras: Background and U.S. Relations*”. US Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov>.
- Meyer, Peter, Clare Ribando, y Congressional Research Service (2015). “*Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress*”. US Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov>.
- Mollet, S. (2014). *A Modern Paradise. Garifuna Land, Labor, and Displacement-in-Place*. <https://www.jstor.org/stable/24573989>
- Mongabay (2023). *Honduras: deforestación, ganadería, cultivos ilícitos y minería ilegal golpean a reservas naturales de La Mosquitia*
- Morgenfeld, Leandro (2023). *Nuestra América frente a la doctrina Monroe: 200 años de disputas*. 1a ed. Buenos Aires: CLACSO.
- Murillo-Sandoval, P. et al. (2024). *Central America's agro-ecological suitability for cultivating coca, Erythroxylum spp*. *Environmental Research Letters*. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad7276>
- OFRANEH (2014). *Honduras: Banco Mundial, paramilitarismo y palma africana*. <https://ofraneh.wordpress.com/2014/01/13/honduras-banco-mundial-paramilitarismo-y-palma-africana/>
- OFRANEH (2010). *Alerta Ambiental: Inician en octubre relleno de humedal en Bahía de Tela*. <https://ofraneh.wordpress.com/2010/09/22/alerta-ambiental-inician-en-octubre-relleno-de-humedal-en-bahia-de-tela/>
- OFRANEH (2007). *Turismo en Centroamérica: Desafíos para comunidades rurales y la gestión territorial*. Miriam Miranda-Panel 2: Comunidades rurales y megaproyectos turísticos en la región Centroamericana. <https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2020/03/MirandaM.pdf>
- OXFAM (2016). *Garifunagu Ágüdahei Hamua Garifunas en defensa de sus territorios*. Defensoras de la Madre Tierra.

Palma-Herrera, J. L. (2019). *El regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI: Las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE)*, la versión de las ciudades chárter rechazada por su creador Paul Romer (2010-2019). Anuario de Estudios Centroamericanos, 45, 133-149. <https://doi.org/10.15517/aeca.v45i0.40696>

Payne, E. (2005). *El puerto de Truxillo: Espacio, economía y sociedad (1780-1870)*. <https://repositorio.ciicla.ucr.ac.cr/server/api/core/bitstreams/525a7215-da46-4ad3-a0d0-16e562fe0864/content>

Pérez Brignoli, Héctor (2017). *El laberinto centroamericano: los hilos de la historia*. 1a ed. Nueva Historia Contemporánea de Centroamérica. San José, Costa Rica: Centro de Investigaciones de América Central. <https://obregon.cihac.fcs.ucr.ac.cr/items/Oca00662-2ef7-4c09-a8cc-b20703ac37fb>.

Picado, H. (2014). *Expulsión y el exterminio del pueblo garífuna en Honduras*. Especial de Revista Biodiversidad, sustento y culturas.

Poder Popular (2023). *Honduras y China profundizan alianza*. Año 2 Edición No. 55 Tegucigalpa, Honduras, 14 de junio de 2023. <https://www.poderpopular.hn/secciones/documentos/PP55edicion.pdf>

PRISMA (2024). *Cuatro décadas de cambio en la inserción internacional de los países del istmo centroamericano 1978 - 2018: Una mirada desde los patrones de generación de divisas*. 2a ed. San José, Costa Rica. <https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2024/07/Cuatro-decadas-de-cambio-en-la-insercion-internacional-de-los-paises-del-istmo-centroamericano-1978-2018.pdf>.

PRISMA (2022). *“Tendencias regionales y gobernanza en Centroamérica: Territorios y actores en la encrucijada”*. Cuaderno. San Salvador: Fundación PRISMA. *Tendencias-regionales-y-gobernanza-en-CA-Territorios-y-actores-en-la-encrucijada.pdf*. <https://www.prisma.org.sv/publicaciones/tendencias-regionales-y-gobernanza-en-centroamerica-territorios-y-actores-en-la-encrucijada/>.

PRISMA (2016). *Evolución Histórica Territorial de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano*. Clark University. https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2023/01/reserva_biosfera_rio-platano-HN-ISBN.pdf

PRISMA (2012). *Inversiones y Dinámicas Territoriales en Centroamérica. Implicaciones para la gobernanza y la construcción de alternativas*. https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2020/02/Inversiones_dinamicas_territoriales_en_CA.pdf

Ribando, Clare, Kristin Finklea, y Congressional Research Service (2017). *“U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”*. US Congressional Research Service. <https://sgp.fas.org/crs/row/R41349.pdf>.

Robinson, William I. (2001). *“Transnational Processes, Development Studies and Changing Social Hierarchies in the World System: A Central American Case Study”*. Third World Quarterly 22 (4): 529-63.

Rojas Bolaños, Manuel (1993). “La política”. En *Historia general de Centroamérica*, editado por Edelberto Torres-Rivas, Julio César Pinto Soria, Héctor Pérez Brignoli, y Víctor H. Acuña Ortega. Madrid: Comunidades Europeas: Sociedad Estatal Quinto Centenario: FLACSO.

Roux, H. (2017). *El derecho al ‘arraigo’: estrategias campesinas ante el avance de megaproyectos y monocultivos (frentes pioneros del Bajo Aguán hondureño y del Caribe nicaragüense)*. IRD Éditions. France. Visto <https://books.openedition.org/irdeditions/32712>

Sandoval García, Carlos (2015). *No más muros: exclusión y migración forzada en Centroamérica*. Primera edición. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica: Editorial UCR, Instituto de Investigaciones Sociales.

Sandoval Palacios, Juan Manuel (2022). *“Militarización y violencia en la frontera México Estados Unidos desde el Siglo XIX. El mexicano como el enemigo perenne”*. En *La conformación histórica de la frontera norte de México: una perspectiva crítica. Volumen II*, 87-120. Buenos Aires: CLACSO.

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) (2024). *Gobierno impulsa el crecimiento de la palma aceitera con nuevas opciones de financiamiento*. <https://www.uepg.sag.gob.hn/wp-content/uploads/2022/03/AC-PALMA-V19.4.pdf>

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) (2024). *Emiratos Árabes Unidos muestra interés en el proyecto del Tren Interoceánico, impulsado por el Gobierno de Honduras*. <https://sreci.gob.hn/node/1894>

Segovia, Alexander (2004). “*Centroamérica después del café: el fin del modelo agroexportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo*”. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales* 1 (diciembre):5–38.

———. (2023). “*Las complejas relaciones entre las élites y la transición verde y justa. La experiencia de Centroamérica (LC/MEX/TS.2023/xx)*”. Ciudad de México: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Sistema Nacional de Información Territorial de Honduras (SINIT). *Hojas cartográficas. Cartografía básica* https://sinit.hn/hojas_cartograficas/1606.pdf

Smith, Joseph (2005). *The United States and Latin America: A History of American Diplomacy, 1776-2000*. London: Routledge. Taylor-Robinson, Michelle M. 2014. “Honduras”. En *Handbook of Central American Governance*, editado por Diego Sánchez Ancochea y Salvador Martí í Puig, 1st. Ed, 420–31. Routledge International Handbooks. New York, NY: Routledge.

Spring, K. (2020). *The Marriage of Drug Money and Neoliberal Development in Honduras*. *Development in Honduras, NACLA Report on the Americas*, 52:4, 397–403, DOI: 10.1080/10714839.2020.1840167

Tellman, B., McSweeney, K., Manak, L., Devine, J., Sesnie, S., Nielsen, E., & Dávila, A. (2021). *Narcotráfico y control de la tierra en Guatemala y Honduras*. *Journal of Illicit Economies and Development*, 3(1), pp. 132–163. DOI: <https://doi.org/10.31389/jied.83>.

The Guardian (2014). *Honduras and the dirty war fuelled by the west's drive for clean energy*. <https://www.theguardian.com/global/2014/jan/07/honduras-dirty-war-clean-energy-palm-oil-biofuels>

The White House (2021). “*Estrategia de los Estados Unidos para afrontar las causas originarias de la migración en América Central*”. National Security Council.

———. (2022). “*National Security Strategy of the United States of America*”. Washington, D.C: National Security Council. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>.

Villafuerte Solís, Daniel (2018). “*Seguridad y control geopolítico: crónica de la iniciativa para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica*”. *Revista CS*, núm. 24 (enero), 91–118. <https://doi.org/10.18046/recs.i24.2506>.


Waxenecker, H. (2019). *Redes de poder políticoeconómico en Honduras: Un análisis post-golpe*. <https://sv.boell.org/es/2020/03/26/redes-de-poder-politico-economico-en-honduras>

Woolston, Sam (2024). “*Juan Orlando Hernández Sentenced to 45 Years in Prison for Drug Trafficking*”. InSight Crime. el 26 de junio de 2024. <http://insightcrime.org/news/juan-orlando-hernandez-sentenced-45-years-prison-drug-trafficking/>.

PRISMA

Programa Regional de Investigación
sobre Desarrollo y Medio Ambiente

REVALORIZANDO COMUNIDADES Y TERRITORIOS

 PrismaRegional

 prisma.regionalorg

 prisma_org

 **prismaregional.org**